

UNIVERSIDAD DE CUENCA



Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales

Carrera de Derecho

**“EL DERECHO A RECIBIR RESOLUCIONES MOTIVADAS
DESARROLLADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, MEDIANTE
RESOLUCIONES DE ACCIONES EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN.”**

Monografía previa a la obtención del
Título de Abogado de los Tribunales
de Justicia de la República del
Ecuador y Licenciado en Ciencias
Políticas y Sociales.

Autor: Ricardo Sebastián Pulla Morocho.

Director: Dr. Fernando Teodoro González Calle.

Cuenca- Ecuador

Julio 2016



RESUMEN

En todas las sociedades ha sido una necesidad importante que las personas obtengan decisiones debidamente motivadas por parte de las personas que las representan o que están en el poder. En la actualidad se denota claramente la imperfección en la técnica y en la formación de los jueces y tribunales al momento de dictar una infinidad de resoluciones judiciales, las cuales pueden estar bien o mal motivadas, afectando por tanto a un sin número de personas, ya sea en sus patrimonios o hasta su honor.

A raíz de la vigencia de la Constitución de la República en el año 2008, se incorporó una nueva garantía de derechos denominada Acción Extraordinaria de Protección, orientada a tutelar el debido proceso y los derechos constitucionales que resulten vulnerados en resoluciones judiciales emitidas por los jueces y tribunales en su actividad jurisdiccional, siendo la motivación uno de estos derechos que frecuentemente es vulnerado. En el presente trabajo se establece cual es la tesis que la Corte Constitucional ha desarrollado sobre la motivación y se explica los tres requisitos que la integran los cuales son: la razonabilidad, lógica, y la comprensibilidad; para que de esta manera la sociedad conozca esta garantía a plenitud y pueda ejercer su derecho a la defensa en el momento oportuno.

Palabras Claves: Acción Extraordinaria de Protección, Motivación, Corte Constitucional, Razonabilidad, Lógica, Comprensibilidad.



ABSTRACT

In all societies it has been an important necessity for people to acquire personal decisions motivated by people that represents them or are in power. Presently, the imperfection in the art and the training of judges and courts when making an infinite number of judicial judgments, which can be well or poorly motivated, affected by both an unlimited number of people, either their assets or even their honor.

Following the enforcement of the Constitution of the Republic in 2008, a new guarantee of Special Rights called protective action is incorporated, designed to protect due process and constitutional rights are violated in judicial rulings issued by judges and courts in their judicial activity, with the motivation of these rights often violated. In this paper it establishes what is the thesis that the Constitutional Court has developed on the motivation and the three comprise requirements which are explained: reasonableness, logic and comprehensibility; so that in this way society knows this warranty and can fully exercise their right to defense in a timely fashion.

Keywords: Special Protection Action, Motivation, Constitutional Court, Reasonableness, Logic, Comprehensibility.



ÍNDICE

RESUMEN.....	2
ABSTRACT	3
DEDICATORIA	8
AGRADECIMIENTOS.....	9
INTRODUCCIÓN	10
CAPÍTULO 1.....	12
LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN.....	12
1.1 NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN.-	
12	
1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN.....	20
1.2.1 <i>Excepcionalidad.....</i>	<i>20</i>
1.2.2 <i>Independencia.....</i>	<i>21</i>
1.2.3 <i>Residualidad.....</i>	<i>21</i>
1.2.4 <i>Especialidad.....</i>	<i>22</i>
1.2.5 <i>Sencilla, Rápida y Eficaz.....</i>	<i>22</i>
1.2.6 <i>Caducidad.....</i>	<i>23</i>
1.3 FINALIDAD DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN.....	24
1.4 COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.....	26
1.5. LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN FRENTE A LA ACCIÓN DE	
NULIDAD DE SENTENCIA.....	30
CAPÍTULO 2.....	33
LA MOTIVACIÓN.....	33
2.1. DEFINICIÓN DE MOTIVACIÓN Y SU FINALIDAD.....	33
2.2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA MOTIVACIÓN EN EL ECUADOR.....	38
2.3. LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES Y LA OBLIGACIÓN DE LA MOTIVACIÓN.....	40
2.4. EL DEBIDO PROCESO Y LA GARANTÍA DE LA MOTIVACIÓN.....	43
2.4.1. <i>La garantía de la motivación en el debido proceso.....</i>	<i>45</i>
2.5. REQUISITOS DE LA MOTIVACIÓN.....	46



CAPÍTULO 3.....	55
EL DERECHO A LA MOTIVACIÓN DESARROLLADO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN ACCIONES EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN.	55
3.1. TEORÍAS DESARROLLADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO A LA MOTIVACIÓN.	55
1. La razonabilidad:	59
2. Lógica.	61
3. La comprensibilidad.	63
3.2. ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS DE ACCIONES EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN RESUELTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL.	65
CONCLUSIONES	83
RECOMENDACIONES	85
BIBLIOGRAFÍA	87



Universidad de Cuenca

Cláusula de Propiedad Intelectual

Ricardo Sebastián Pulla Morocho, autor de la monografía, **“EL DERECHO A RECIBIR RESOLUCIONES MOTIVADAS DESARROLLADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, MEDIANTE RESOLUCIONES DE ACCIONES EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN**, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, Julio de 2016

Ricardo Sebastián Pulla Morocho

C.I. 0106624497



Universidad de Cuenca

Claúsula de Derecho de Autor

Ricardo Sebastián Pulla Morocho, autor de la monografía, **“EL DERECHO A RECIBIR RESOLUCIONES MOTIVADAS DESARROLLADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, MEDIANTE RESOLUCIONES DE ACCIONES EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN.”**, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de, Abogado de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Cuenca, Julio de 2016



Ricardo Sebastián Pulla Morocho
C.I. 0106624497



DEDICATORIA

La realización de esta monografía está dedicada a mis padres, quiénes siempre me ha brindado su apoyo incondicional y gracias a su gran sacrificio, estoy cumpliendo una meta más en mi vida. A mi hermana gracias a su paciencia y cariño.

Ricardo Pulla M.



AGRADECIMIENTOS

Un especial agradecimiento al Doctor Fernando González Calle, quién con su sabiduría y paciencia ha dirigido el presente trabajo.

Agradezco también a mi familia y amigos que han sido un pilar fundamental para alcanzar este logro.

Agradezco en gran manera a la Universidad de Cuenca que me ha impartido grandes valores y me ha permitido formarme como un profesional en el apasionante estudio del Derecho.

Ricardo Pulla M.

Introducción

La normativa constitucional impone el deber de motivar las resoluciones judiciales por parte de los jueces, por lo que estos deben indicar cuáles son las razones que los han conducido a fallar en uno u otro sentido y de esta manera demostrar que su decisión no es arbitraria, sino el resultado de un correcto ejercicio de la función jurisdiccional y que si se llegare a omitir aquel deber constitucional, aquella decisión, ipso iure, será considerada nula de acuerdo a la Constitución de la República.

Por tanto, con la motivación el juez expone todas las razones que le han conducido a tomar su decisión y permite, no solo a las partes involucradas, sino a toda la sociedad conocer esas razones, y al mismo tiempo, hace posible el posterior control del proceso por los órganos jurisdiccionales superiores.

Siendo la Corte Constitucional el máximo órgano de control, la cual tiene competencia para conocer el mecanismo constitucional llamado Acción Extraordinaria de Protección, cuya finalidad es la protección de los derechos constitucionales y las normas del debido proceso; buscando garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso cuando sean violados por parte de Jueces o de los Tribunales en el ejercicio de su actividad jurisdiccional; pudiendo por lo tanto revocar las sentencias, autos definitivos y autos con fuerza de sentencia.

Cabe recalcar que la Acción Extraordinaria de Protección viene a ser un mecanismo excepcional que busca garantizar la supremacía de la Constitución frente a la violación de derechos ya sea por acción u omisión de los órganos encargados de dictar justicia.

Por lo tanto, el objetivo de esta acción es la tutela de los derechos constitucionales o garantías del debido proceso cuando existan circunstancias que denoten una violación de derechos constitucionales.

En la presente investigación se estudia el papel que cumple la Corte Constitucional al momento de resolver Acciones Extraordinarias de Protección cuando en las resoluciones judiciales se ha violentado la garantía constitucional



de la motivación. Así mismo, se analiza los pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional al establecer cuando se cumple a cabalidad la garantía de la motivación, y cuáles son los requisitos que dentro de ella deben observar todos los órganos encargados de administrar justicia al momento de dictar sus decisiones.

En el primer capítulo se analiza cuál es la naturaleza de la Acción Extraordinaria de Protección, sus características, además de saber cuál es su finalidad. Se realiza un análisis sobre la competencia que tiene la Corte Constitucional para conocer esta. Finalmente se realizará un análisis sobre la Acción Extraordinaria de Protección frente a la Acción de Nulidad de Sentencia.

En el segundo capítulo se analizará sobre la garantía de la motivación y su finalidad, además se analiza una breve historia de la motivación en nuestro país. Se analizará la obligación del cumplimiento de la motivación en las diferentes providencias judiciales. Se estudiará la motivación dentro del debido proceso. Finalmente se analizará las características de la motivación desde un punto de vista doctrinario.

En el tercer y último capítulo, se precisa cual es la tesis desarrollada por la Corte Constitucional sobre la motivación, en las resoluciones emitidas por esta en Acciones Extraordinarias de Protección. Finalmente se analizarán casos resueltos por la Corte Constitucional en Acciones Extraordinarias de Protección, en donde se observará los criterios que adopta la Corte Constitucional al momento de resolver la violación de la garantía constitucional de la motivación.



“EL DERECHO A RECIBIR RESOLUCIONES MOTIVADAS DESARROLLADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, MEDIANTE RESOLUCIONES DE ACCIONES EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN.”

Capítulo 1

La Acción Extraordinaria de Protección.

1.1 Naturaleza jurídica de la Acción Extraordinaria de Protección.-

La Acción Extraordinaria de Protección fue establecida en la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008 por la Asamblea Nacional Constituyente reunida en Montecristi; esta acción se crea por la necesidad de dar un mayor amparo a los derechos constitucionales dentro de la sustanciación de los procesos judiciales, ya que en la anterior Constitución tales derechos no contaban con las garantías que hagan efectivo, tanto su cumplimiento como su exigibilidad.

Nuestra actual Constitución dispone lo siguiente acerca de la Acción Extraordinaria de Protección:

Art 94.- *La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado*

La Corte Constitucional respecto de la Acción Extraordinaria de Protección ha establecido lo siguiente:

Se incorpora para tutelar, proteger y remediar las situaciones que devengan del error de los jueces [...] busca protección efectiva,

*imparcial y expedita de los derechos e intereses de la sociedad. Teniendo los jueces ordinarios, cuya labor de manera general radica en la aplicación del derecho común, un control que deviene de los jueces constitucionales en el más alto nivel, cuya labor se centraría a verificar que dicho jueces en la tramitación de las causas, hayan observado el debido proceso, la seguridad jurídica y otros derechos constitucionales, en uso del principio de la supremacía constitucional.*¹

Si la función que tienen los jueces es la de garantizar los derechos de los ciudadanos establecidos en la Constitución, es necesario que, cuando esta función no ha sido cumplida a cabalidad, la Constitución permita *“la activación de un mecanismo jurisdiccional extraordinario que permita revisar tales decisiones”*² y esto con la finalidad de proteger los derechos prescritos en la Constitución.

Se deduce entonces que la Acción Extraordinaria de Protección procede exclusivamente en contra de las sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia que se hallen firmes o ejecutoriados.

En este punto, el Código Orgánico General de Procesos en cuanto a las sentencias ejecutoriadas establece lo siguiente:

Artículo 101.- Sentencia ejecutoriada. *La sentencia ejecutoriada surte efectos irrevocables con respecto a las partes que intervinieron en el proceso o de sus sucesores en el derecho. En consecuencia, no podrá seguirse nuevo proceso cuando en los dos procesos hay tanto identidad subjetiva, constituida por la intervención de las mismas partes; como identidad objetiva, consistente en que se demande la misma cosa, cantidad o hecho, o se funde en la misma causa, razón o derecho.*

¹ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 067-10-Sep-CC.

² Estrella Carmen, “La Acción Extraordinaria de Protección”. Tesis de Grado. Programa de Maestría en Derecho. Mención en Derecho Constitucional. Universidad Andina Simón Bolívar sede en Ecuador. Quito, 2010, 58.

Por lo tanto, es la sentencia que ya no admite recurso judicial alguno que permita revocarla, modificarla o confirmarla y se puede exigir el cumplimiento incidental o iniciar demanda ejecutiva en su caso. Se dice que la causa está "ejecutoriada", cuando ya han terminado todos los trámites legales y produce además el efecto jurídico de cosa juzgada.

En cuanto a la institución de *cosa juzgada*; es aquella que garantiza que las sentencias sean definitivas, es decir, la imposibilidad de que estas sean modificadas por medio de recursos o que se discuta en un procedimiento judicial un asunto que previamente ya fue resuelto en otro proceso anterior.

El Código Orgánico General de Procesos sobre la autoridad de la cosa juzgada sobre los autos y las sentencias dispone lo siguiente:

Artículo 99.- Autoridad de cosa juzgada de los autos interlocutorios y de las sentencias. *Las sentencias y autos interlocutorios pasarán en autoridad de cosa juzgada en los siguientes casos:*

- 1. Cuando no sean susceptibles de recurso.*
- 2. Si las partes acuerdan darle ese efecto.*
- 3. Si se dejan transcurrir los términos para interponer un recurso sin hacerlo.*
- 4. Cuando los recursos interpuestos han sido desistidos, declarados desiertos, abandonados o resueltos y no existen otros previstos por la ley.*

Sin embargo, lo resuelto por auto interlocutorio firme que no sea de aquellos que ponen fin al proceso, podrá ser modificado al dictarse sentencia, siempre que no implique retrotraer el proceso.

Se ha definido a la cosa juzgada por parte de doctrinarios como Couture como *“la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla.”*³

El Doctor Hernán Coello García ha definido a la cosa juzgada de la siguiente manera:

*“Evoca la idea del imperio que le es propia, esto es, la obligatoriedad incuestionable de la que goza; y de que, además, dispone de plena eficacia jurídica para que pueda ejecutarse su contenido; de lo cual resulta que es inimpugnable porque ya no puede ser revisada, porque se convierte en la máxima preclusión dentro del proceso, lo cual se garantiza, precisamente, dotando a la parte beneficiaria de un fallo ejecutoriado, de la excepción, llamada perentoria en nuestro ordenamiento jurídico, de cosa juzgada.”*⁴

Pero, para encontrarnos frente a un verdadero caso de cosa juzgada son necesarios los elementos que se enuncia a continuación:

- 1) Identidad subjetiva.- Intervención de las mismas partes procesales.
- 2) Identidad objetiva.- El objeto del juicio es la misma cosa, cantidad o hecho fundamentada en la misma causa, razón o derechos.

Es necesario tener en consideración que la cosa juzgada se diferencia en:

Cosa Juzgada Material: se entiende por cosa juzgada material aquella que impide que una sentencia o resolución judicial sea inatacable a través de un nuevo juicio, impidiendo de este modo la posibilidad que sea modificada en su contenido.

³ Couture Eduardo, “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. Editorial BdeF, cuarta edición. Buenos Aires, 2005, 90.

⁴ Coello García Hernán, “Epítome del Título Preliminar del Código Civil y sus principales relaciones con la legislación ecuatoriana”. Universidad de Cuenca, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales, segunda edición. Cuenca, 2004, 60.

De acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia se define a la cosa juzgada material de la siguiente manera:

“Cosa juzgada material es la inatacabilidad indirecta o mediata de un resultado procesal, el cierre de toda posibilidad de que se emita, por la vía de apertura de un nuevo proceso, ninguna decisión que se oponga o contradiga a la que goza de esta clase de autoridad.”⁵

En cuanto a la Corte Nacional de Justicia, ésta ha definido a la cosa juzgada material o sustancial de la siguiente manera:

“La cosa juzgada sustancial supone, fundamentalmente, como ya se comentó, la inmutabilidad de la sentencia, es decir que ésta, aparte de no ser susceptible de ataque directo mediante la interposición de un recurso, tampoco lo es de ataque indirecto a través de la apertura de un nuevo proceso, por lo que se dice que aquella goza de autoridad de cosa juzgada en sentido material.”⁶

Cosa Juzgada Formal: se da cuando no hay posibilidad de que una determinada decisión judicial sea recurrida por algún recurso legal, es decir, genera la improcedencia o cierre de los recursos contra una resolución judicial. En cuanto a los efectos de la cosa juzgada formal se generan únicamente dentro del proceso en el que se ha dictado la sentencia, por ello tiene un carácter limitado, ya que sus efectos podrían desaparecer en un proceso distinto a aquel en que se generó. La cosa juzgada formal se refiere al interior de un proceso en general, que es determinado e identificable, esto es individualizado.

⁵ Corte Nacional de Justicia. Expediente No. 435-99, Primera sala, Registro Oficial 274, 10-IX-99.

⁶ Corte Nacional de Justicia. Sala de lo Civil y Mercantil. Sentencia 26 de Noviembre del 2012.

La Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que la cosa juzgada formal puede ser correctamente definida como *“la imposibilidad de que una cierta decisión procesal sea recurrida: el cierre de los recursos procedentes contra la misma.”*⁷

Según lo ha establecido la Corte Nacional de Justicia en sentencia la cosa juzgada formal debe ser entendida de la siguiente manera:

“Determinadas decisiones judiciales tienen, aún agotada la vía de los recursos, eficacia meramente transitoria, se cumplen y son obligatorias tan solo con relación al proceso en que se han dictado y al estado de cosas que se tuvo en cuenta en el momento de decidir, pero no obstan a que, en un procedimiento posterior, mudado el estado de cosas que se tuvo presente al decidir, la cosa juzgada pueda modificarse”⁸

La Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre la diferencia entre la cosa juzgada material y la cosa juzgada formal y en sentencia ha establecido lo siguiente:

“La cosa juzgada por su parte, resulta en un atributo, en una calidad que el ordenamiento jurídico destina a la sentencia, cuando esta cumple con los requisitos para que quede firme: sea inimpugnable (cosa juzgada formal) y sea inmutable (cosa juzgada material).”⁹

Ahora bien, la cosa juzgada es un principio procesal con fundamento en la ley, en cambio la Acción Extraordinaria de Protección es una acción de rango constitucional; recordemos que la Constitución en el Art 425 establece el orden jerárquico normativo, siendo la cosa juzgada una institución infra constitucional. Es por eso que cuando se efectiviza esta acción constitucional no se estaría

⁷ Corte Nacional de Justicia. Expediente No. 506, Primera Sala, Registro Oficial 2, 13-VIII-96.

⁸ Corte Nacional de Justicia. Sala de lo Civil y Mercantil. Sentencia 26 de Noviembre del 2012.

⁹ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 012-14-SEP-CC. Caso N.º 0529-12-EP.

atentando a la cosa juzgada, sino que los efectos de la cosa juzgada se van a aplazar hasta que la acción sea resuelta.

La Acción Extraordinaria de Protección está establecida por nuestra Constitución como una *acción* en su Art. 94; sin embargo el mismo artículo la llama *recurso*. Es menester por ello recalcar que se trata de una acción y por ello se realizará el siguiente análisis.

En el derecho procesal, el recurso es un medio mediante el cual se concede a las partes la posibilidad de modificar una decisión judicial a través del acceso a otros niveles jerárquicos del proceso, pero el recurso siempre estará dentro del mismo proceso.

Ahora bien, para Echandía el recurso es:

“Una petición formulada por una de las partes principales o secundarias para que el mismo juez que profirió una providencia o su superior la revise, con el fin de corregirlos errores de juicio o de procedimiento (in judicando o in procedendo) que en ella se haya cometido.”¹⁰

Por lo tanto para este tratadista es un acto del proceso, por lo que considera impertinente hablar de recurso cuando se trata del inicio un nuevo proceso.

En cuanto a la acción, ésta significa el inicio de un nuevo proceso y constituye el acto mediante el cual se inicia la actividad jurisdiccional de los Jueces.

Así mismo para Echandía la acción es:

“El derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y Autónomo, que tiene toda persona natural o jurídica para obtener la aplicación de la

¹⁰ Devis Echandía, “Teoría General del Proceso”. Editorial Universitaria. Buenos Aires, 1977, 182.



jurisdicción del Estado a un caso concreto mediante una sentencia, a través de un proceso.”¹¹

Nuestra Corte Constitucional se ha pronunciado al darnos una definición de lo que se entiende por acción y nos ha dicho que acción es “*la facultad de las personas de acudir al ente estatal, por medio de sus órganos jurisdiccionales y obtener de ellos la tutela de sus derechos e intereses*”.¹²

Entonces la Acción Extraordinaria de Protección es una *acción* y no un recurso; la cual se caracteriza por: no discutir la pretensión original, no es una fase o instancia dentro del proceso judicial y finalmente se va a iniciar otro proceso de naturaleza constitucional en el que se va a analizar si se han vulnerado los derechos constitucionales.

Ahora bien, la Acción Extraordinaria de Protección es un derecho que asiste a los ciudadanos, ya sea en forma individual o colectiva a presentar esta acción ante la jurisdicción constitucional, para que de esta manera se resuelvan los derechos constitucionales que han sido vulnerados, ya sea, por la acción u omisión de un juez de instancia ordinaria; siendo por lo tanto una acción completamente diferente y autónoma, ya que en esta se ha de realizar un examen para determinar si ha existido la vulneración de derechos, por lo que es completamente diferente al estudio que se hace de los hechos que han constituido la materia del juicio, esto en el proceso ordinario, que se da cuando una persona que se considera vulnerada por una decisión judicial impugna la misma ante el mismo juez o ante un juez de instancia superior para que ésta sea reformada o anulada.

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la naturaleza de la Acción Extraordinaria de Protección y ha dicho que:

¹¹ Ibíd., 189.

¹² Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 11-09SEP-CC; 2009.



“Procede en contra de sentencias, autos en firme o ejecutoriados y resoluciones judiciales que pusieren fin al proceso; en esencia la Corte Constitucional, por medio de esta acción excepcional, se pronunciará respecto a dos cuestiones principales: la vulneración de derecho constitucionales sustanciales o la violación de normas del debido proceso.”¹³

Es entonces la Acción Extraordinaria de Protección un mecanismo de control excepcional respecto a la constitucionalidad de las providencias judiciales expedidas por parte de los órganos judiciales.

1.2 Características de la Acción Extraordinaria de Protección.

Entre las características básicas de la Acción Extraordinaria de Protección tenemos las siguientes:

1.2.1 Excepcionalidad.

La excepcionalidad o extraordinariedad es la característica más distintiva de esta acción, ya que procede *exclusivamente* en contra de las sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia que se hallen firmes o ejecutoriados; pero además es preciso que se cumpla con el presupuesto establecido en la Constitución el cual nos establece que exista la vulneración de derechos constitucionales.

¹³ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 154-15-SEP-CC. Caso No. 1220-11-EP.

1.2.2 Independencia.

Debido a que es una acción que *“no guarda relación alguna con otras garantías jurisdiccionales”*¹⁴; además tiene esta característica ya que en la Acción Extraordinaria de Protección se ha de realizar un análisis para comprobar la existencia de vulneración de los derechos constitucionales o que se hayan violado las normas del debido proceso, es decir se trata de otro proceso, el cual es muy diferente al que se realiza en los procesos de la jurisdicción ordinaria, por lo que no resolverá los hechos litigiosos que dieron origen al proceso ordinario.

1.2.3 Residualidad.

La característica de la residualidad es el agotamiento previo de los mecanismos jurídicos contemplados como requisito para acceder al mecanismo residual. El Art. 94 de la Constitución establece que la Acción Extraordinaria de Protección procede cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal; por lo que se entiende que si el proceso judicial no ha terminado, es necesario interponer todos los recursos que prevea la ley para que éste quede concluso y así se restablezca el derecho en conflicto; existiendo así una posibilidad de que esta acción quede en suspenso hasta que se cumplan con las condiciones que impone nuestro ordenamiento jurídico.

Ahora bien, el Art. 94 de la Constitución establece una excepción a esta regla general y es que *“la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado”*. Es por eso que, si por causas completamente ajenas a su voluntad, el afectado de sus derechos no ha interpuesto ninguno de los recursos previstos y exigidos en la ley para la terminación del proceso judicial en instancia ordinaria; como sucedería por ejemplo cuando no se conoce el contenido de la decisión por

¹⁴Jaramillo Marcelo, “La Acción Extraordinaria de Protección”. Internet: <https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/pdfs/presentacion1.pdf>. Acceso: enero 2016.



falta de notificación, o porque no ha conocido de la tramitación de una causa en su contra, le sea factible poder interponer una Acción Extraordinaria de Protección.

Así mismo podríamos darle una consideración especial a los recursos de aclaración y de ampliación, recursos que se interponen en primera instancia, pero, en ocasiones no será necesario interponerlos, es decir, cuando la sentencia es suficientemente clara o no necesita ser completada en su contenido. En definitiva deberían ser considerados únicamente aquellos recursos necesarios e idóneos para obtener la reparación de los derechos antes de interponer la Acción Extraordinaria de Protección.

1.2.4 Especialidad.

Goza de esta característica debido a que no es factible interponerla sobre cuestiones de mera legalidad, si no únicamente se la puede ejercer cuando existe violación de los derechos constitucionales o violación a las normas del debido proceso.

1.2.5 Sencilla, Rápida y Eficaz.

Dentro de las *Garantías Jurisdiccionales*, en cuanto a las disposiciones comunes a estas, el Art. 86 numeral dos, literal a, nos dice que gozarán de sencillez, rapidez y eficacia; pero en el caso de la Acción Extraordinaria de Protección es sumamente necesario que goce de estas características debido a que están en juego los derechos consagrados en la Constitución, los cuales necesitan ser reparados y protegidos de la manera más prolija y con la suma prontitud; es por eso que el Estado debe proveer los mecanismos necesarios y eficaces para lograr ese fin.

Si bien nuestra Constitución habla que la Acción Extraordinaria de Protección gozará de sencillez, la verdad es que está sujeta a varios requisitos de procedibilidad, por lo que en la práctica esta característica no se cumple a

cabalidad, sino más bien, es un tanto compleja; además debemos tener presente que la Constitución en el artículo 75 nos menciona que:

Art. 75.- *Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.*

Así mismo en el artículo 196 dispone lo siguiente:

Art. 169.- *El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.*

Es por eso que esta acción debe ser el medio más idóneo y ágil para evitar la vulneración de los derechos constitucionales, por lo que esta acción será revisada no en una instancia más de la jurisdicción ordinaria en que se originó el litigio, sino en un proceso totalmente diferente, que será ventilado en la jurisdicción constitucional.

1.2.6 Caducidad.

En este caso es necesario remitirnos a lo que establece el Art 60 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, en donde se establece que:

Art. 60.- *El término máximo para la interposición de la acción será de veinte días contados desde la notificación de la decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho constitucional, para quienes*

fueron parte; y, para quienes debieron serlo, el término correrá desde que tuvieron conocimiento de la providencia.

Esta norma se estableció por parte del legislador para evitar que esta acción sea interpuesta sin límite alguno de tiempo, afectando de esta manera a la seguridad jurídica; es por eso que quien o quienes consideren que se ha violado las normas del debido proceso o los derechos consagrados en la Constitución podrán interponer esta acción únicamente dentro del término establecido en esta norma. Caso contrario, si no se ha interpuesto esta acción entraría a operar una especie de presunción, ya que se consideraría que si no se ha ejercido el derecho de interponer esta acción, la decisión que no ha sido impugnada ha sido voluntariamente consentida en su contenido y así mismo que se ha renunciado al derecho a ejercerla.

Esta característica además impide que sean objeto de esta acción aquellas sentencias o decisiones dictadas antes de la vigencia de la Constitución del 2008 y aunque en estas decisiones exista claramente la violación a derechos constitucionales o normas del debido proceso, estas han quedado ya consolidadas. Así lo dicta la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional: *“Podrán presentarse las acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencias dictadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución Política del año 2008.”*

1.3 Finalidad de la Acción Extraordinaria de Protección.

Como se desprende del Art. 94 de la Constitución del Ecuador la Acción Extraordinaria de Protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales cuando estos hayan sido violados ya sea por la acción u omisión de los jueces de la jurisdicción ordinaria.

Además la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, determina que:

Art. 58.- *La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución.*

La Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de la finalidad o el objetivo que persigue la Acción Extraordinaria de Protección, mencionando lo siguiente:

“Tiene como finalidad que la vulneración de derechos constitucionales o violación de las normas del debido proceso no queden en la impunidad, por lo que asumiendo el espíritu garantista de la Constitución de la República, mediante esta acción excepcional, se permite que las sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencias, firmes y ejecutoriados puedan ser objeto de revisión por parte del más alto órgano de control de constitucionalidad en el país”.¹⁵

Existe otro pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la finalidad de la Acción Extraordinaria de Protección, ampliando su definición y estableciendo que:

“Tiene la finalidad de revisar el debido proceso, observancia y respeto de los derechos determinados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos en lo que respecta al debido proceso y a la prestación de una tutela efectiva en los procesos judiciales sean estos ordinarios o constitucionales”.¹⁶

Por lo expuesto, esta acción tiene dos finalidades de suma importancia: 1) La tutela de los derechos constitucionales y las garantías del debido proceso cuando estos hayan sido violados, y 2) Posibilita que la Corte Constitucional

¹⁵ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 180-15-SEP-CC.

¹⁶ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 154-15-SEP-CC.

realice un exámen sobre las decisiones judiciales para verificar si se han aplicado los instrumentos internacionales que versen sobre derechos humanos.

Doctrinariamente Cueva Carrión ha definido el objeto de la Acción Extraordinaria de Protección de la siguiente manera:

“Esta acción constitucional extraordinaria tiene como objeto fundamental reparar las violaciones cometidas por los órganos judiciales del Estado ecuatoriano contra derechos reconocidos por la Constitución, cuando se hubieren agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios, porque ya no es posible su reparación dentro de la misma lineal jurisdiccional a la que se acusa de tal violación; de aquí dimana su carácter excepcional que caracteriza a esta acción.”¹⁷

En tal virtud, la Acción Extraordinaria de Protección persigue dos finalidades: en primer lugar, corregir los posibles errores judiciales que se han llegado a cometer dentro de un proceso y en segundo lugar, actúa como una especie de herramienta que permite alcanzar la uniformidad constitucional, lo cual se logra a través de sentar precedentes indispensables para precautelar la plena y la efectiva vigencia de los derechos constitucionales.

1.4 Competencia de la Corte constitucional.

La competencia de la Corte Constitucional para conocer y resolver Acciones Extraordinarias de Protección está dada por la propia Constitución de conformidad a lo que nos establece el Art. 94 ya citado anteriormente y el Art. 437, numeral uno y dos:

Art. 437. *Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias,*

¹⁷ Cueva Carrión, “Acción Constitucional Extraordinaria de Protección”. Sin editorial. Quito, 2010, 60.

autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la Corte constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- 1. Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados.*
- 2. Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución.*

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el Art. 63 y Art. 191 numeral dos literal c y d, establecen que:

Art. 63.- *La Corte Constitucional determinará si en la sentencia se han violado derechos constitucionales del accionante y si declara la violación, ordenará la reparación integral al afectado.*

Art. 191.- Funciones.- *Corresponde al Pleno de la Corte Constitucional:*

2) Ejercer las funciones de control constitucional previstas en la Constitución de la República y en la presente ley, de la siguiente manera:

C) Resolver sobre las sentencias de unificación en el caso de las acciones de protección, extraordinaria de protección, incumplimiento, hábeas corpus, hábeas data y acceso a la información pública.

D) Resolver sobre las acciones extraordinarias de protección de derechos en contra de decisiones de la justicia ordinaria e indígena.

En cuanto al Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional expedido por el Pleno de la Corte Constitucional para el periodo de transición, establece lo siguiente en el Art. 3, numeral 8, literal b:

Art. 3.- Competencias de la Corte Constitucional.- De conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte Constitucional tiene las siguientes competencias:

8.- Conocer y resolver las acciones de Garantías Jurisdiccionales de los derechos, en los siguientes casos:

b) Acción Extraordinaria de Protección.

También en el Art. 35, inciso tercero de este reglamento dispone:

Art. 35.- Trámite. [...] Inciso tercero.- La Corte Constitucional, es el único órgano competente para admitir, conocer y resolver la acción extraordinaria de protección, en consecuencia, la judicatura, sala o tribunal se limitará a receptar la demanda y la remitirá con el expediente, sin más trámite, dentro del término previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, debiendo observar lo dispuesto en el artículo 36 del presente Reglamento. En caso de incumplimiento de esta disposición, la Corte Constitucional pondrá en conocimiento del Consejo de la Judicatura el hecho, para la sanción disciplinaria correspondiente.

La revisión que puede realizar la Corte Constitucional a las decisiones judiciales está justificada por el necesario control de constitucionalidad que demanda la supremacía de la Constitución; por lo que se encuentra sujeto a esta revisión, todo acto de autoridad.

Según Cueva Carrión el control constitucional es “externo,” explicándolo de la siguiente manera:

“El Control Constitucional externo se encuentra a cargo de la Corte Constitucional y es externo porque tiene lugar fuera del proceso que

concluye con la resolución inconstitucional, siempre que se lo requiera deduciendo la pertinente acción, sea de protección o extraordinaria de protección, pero en todo caso, se requiere que el titular de los derechos conculcados por la resolución inconstitucional o el sujeto procesal perjudicado reclama la tutela jurídica constitucional de tales derechos deduciendo la pertinente acción constitucional.”¹⁸

Si la función de la Acción Extraordinaria de Protección es la de proteger y reparar las violaciones a los derechos constitucionales y a las normas del debido proceso, es propicio que la Corte Constitucional siendo el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional, además de ser un órgano autónomo e independiente de los demás órganos del poder público, y que tiene jurisdicción en todo el Ecuador; sea la instancia constitucional competente para revisar aquellas decisiones de los jueces de las instancias ordinarias, evitando de esta manera cualquier tipo de intervención en sus resoluciones y garantizando una verdadera tutela y seguridad jurídica.

En este contexto la Corte Constitucional tiene la facultad para examinar en forma directa la supuesta vulneración de derechos y normas del debido proceso constitucional y de otros derechos garantizados en la Constitución de la República y además en los instrumentos internacionales en los que se protegen los derechos humanos, correspondiéndole substancialmente a la Corte Constitucional verificar y asegurar que en los procesos se respeten los derechos y las garantías constitucionales.

Finalmente se ve que es necesaria la intervención de la Corte Constitucional para analizar únicamente aquellos asuntos de carácter constitucional, razón por la cual su actuación está proscrita para realizar un examen de aquellas cuestiones que implican a la legalidad, ya que la competencia de este estudio radica en la justicia ordinaria.

¹⁸ Ibid., 60.

1.5. La Acción Extraordinaria de Protección Frente a la Acción de Nulidad de Sentencia.

Existe un debate entre la Acción Extraordinaria de Protección y la Acción de Nulidad de Sentencia, ya que la Acción Extraordinaria de Protección se la puede impugnar cuando se hayan agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios, sin embargo la Constitución no dice nada en cuanto a las acciones de impugnación, como es el caso de la Acción de Nulidad, ya que ésta implica el inicio de un nuevo proceso; por lo tanto, la cuestión es qué sucede cuando existe la posibilidad de interponer una acción de impugnación en contra de la decisión jurisdiccional que se alega viola derechos constitucionales, tal como lo es la Acción de Nulidad de Sentencia, la cual se encuentra contemplada en el Código Orgánico General de Procesos que dice:

Artículo 112.- Nulidad de sentencia. *La sentencia ejecutoriada que pone fin al proceso es nula en los siguientes casos:*

- 1. Por falta de jurisdicción o competencia de la o del juzgador que la dictó, salvo que estas se hayan planteado y resuelto como excepciones previas.*
- 2. Por ilegitimidad de personería de cualquiera de las partes, salvo que esta se haya planteado y resuelto como excepción previa.*
- 3. Por no haberse citado con la demanda a la o el demandado si este no compareció al proceso.*
- 4. Por no haberse notificado a las partes la convocatoria a las audiencias o la sentencia, siempre y cuando la parte no haya comparecido a la respectiva audiencia o no se haya interpuesto recurso alguno a la sentencia.*

Las nulidades comprendidas en este artículo podrán demandarse ante la o el juzgador de primera instancia de la misma materia de aquel que dictó sentencia, mientras esta no haya sido ejecutada. No podrán ser conocidas por la o el juzgador que las dictó. La presentación de la demanda de nulidad no impide que se continúe con la ejecución.

La nulidad de la sentencia no podrá demandarse cuando haya sido expedida por las salas de la Corte Nacional de Justicia y se dejará a salvo las acciones que franquee la Constitución de la República.

Si bien en la Acción Extraordinaria de Protección se requiere para su interposición el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios previstas en nuestro ordenamiento jurídico; la Acción de Nulidad de Sentencia se la puede interponer no por el agotamiento de los recursos, sino más bien cuando la sentencia se haya ejecutoriado por la falta de interposición de los recursos verticales de forma oportuna.¹⁹

Por lo tanto, y de acuerdo a lo que nos dice Guerrero del Pozo *la regla general es que: una sentencia que sea susceptible de ser impugnada a través de una Acción Extraordinaria de Protección no lo sería a través de una Acción de Nulidad de Sentencia y viceversa.*²⁰

Pero existe una excepción a esta regla en la que sí puede existir tal superposición, ya que la Constitución en el Art. 94 y la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional en su Art. 61 numeral 3; le habilita a interponer la acción extraordinaria de protección a quien no ha agotado los recursos ordinarios y extraordinarios cuando la falta de interposición no sea atribuible a la negligencia del titular del derecho constitucional vulnerado, y en este caso, podemos tener una sentencia que está ejecutoriada y por lo tanto es susceptible tanto de Acción de Nulidad como de Acción Extraordinaria de Protección pues aparentemente se cumplirían los requisitos de admisibilidad de ambas acciones.

Entonces, estaríamos frente a dos alternativas: **1)** Aceptar la posibilidad de que se interpongan ambas acciones de forma concurrente o alternativa; y, **2)** Que únicamente se puede proponer la Acción Extraordinaria de Protección una vez que se haya agotado la Acción de Nulidad de Sentencia.

¹⁹ Guerrero del Pozo Juan, "La Residualidad de la Acción Extraordinaria de Protección frente a la Acción de Nulidad de Sentencia en Nuevos Retos del Constitucionalismo Ecuatoriano: Democracia, Garantías y Derechos, Asociación Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito, 2011, 6.

²⁰ *Ibíd.*

Ahora bien, tanto la Acción Extraordinaria de Protección como la Acción de Nulidad de Sentencia jamás pueden asimilarse a un recurso, ya que las dos implican el nacimiento de un proceso nuevo y distinto de aquel en el cual se dictó la sentencia cuya nulidad se pretende y por tanto la acción de nulidad no altera la característica de ejecutoriedad de las providencias que se impugnan.²¹

Por lo tanto, si se aceptara la primera alternativa, es decir, la interposición de ambas acciones conjuntamente, *se podrían dictar fallos contradictorios sin una clara determinación de cual debería prevalecer.*²²

Y si se aceptara la segunda posibilidad, implicaría que la Acción Extraordinaria de Protección debe ser concebida como la última alternativa frente a la vulneración de derechos constitucionales por parte de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, de tener otra alternativa, no debería proceder la Acción Extraordinaria de Protección, por cuanto dejaría de tener el carácter de residual para convertirse en una acción alternativa a las que ya contempla nuestro ordenamiento jurídico.²³

Si una sentencia cumpliera con las cuatro causales del Art. 112 del Código Orgánico General de Procesos, se estaría claramente violando el derecho al debido proceso y además el derecho a la defensa; con razón dice el Doctor Juan Guerrero del Pozo que:

*“Quién se crea afectado por una sentencia que viole tales garantías, primero debe iniciar y agotar la Acción de Nulidad de Sentencia y únicamente en caso de que por esta acción no se consiga la reparación de los derechos, estará habilitado para interponer la Acción Extraordinaria de Protección conservando así su característica de la Residualidad.”*²⁴

²¹ Ibid., 7.

²² Ibid., 8.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid., 9.

Capítulo 2

La Motivación.

2.1. Definición de motivación y su finalidad.

Para comenzar con el análisis de la motivación es necesario definirla; no sin antes decir que los jueces no tienen una fuerza ilimitada al dictar sus fallos o resoluciones, por lo que estos deben estar debidamente motivados, es decir, debe existir una justificación de cómo se han valorado los hechos y la pertinencia de la aplicación de las leyes. Por lo tanto es una necesidad que en las decisiones judiciales que adoptan los jueces o tribunales se hagan públicas las razones que estos han adoptado para fallar de una u otra manera, demostrando así que estos no han cometido ningún tipo de arbitrariedad sino más bien que estos han ejercido de una manera correcta sus funciones que les han sido encomendadas.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la motivación es: *Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer una cosa.*²⁵

Ciertas tesis al hablar de la motivación nos dicen que no solo basta una exposición del caso que se juzga sino explicar la solución a la que se ha llegado mediante un *razonamiento lógico*.²⁶ Constando por lo tanto el proceso que ha llevado al juez a su convencimiento final y las razones que motivaron a este.

Para Florencio Mixán al definir la motivación la considera desde el punto de vista del deber-ser jurídico y dice que: *“constituye un deber jurídico, instituido por la norma jurídica de máxima jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional.”*²⁷

²⁵ Diccionario de la lengua española. Espasa Libros, S. Editorial, 23° Edición. Madrid, 2014.

²⁶ Franciskovic Ingunza Beatriz y Torres Angulo Carlos, “La sentencia arbitraria por falta de Motivación en los hechos y el derecho”. Gaceta Jurídica Editorial. Quito, 2012, 9.

²⁷ Mass Mixan Florencio, “Lógica enunciativa y jurídica”. Ediciones BLG. Lima, 1987, 7.

Según Emilio Dolcini: *“La motivación es el instrumento predispuesto por la ley para el control democrático de un poder cuyo titular es el pueblo.”*²⁸

Por lo tanto las decisiones que adoptan los órganos judiciales y así mismo las autoridades estatales deben guardar concordancia con la ley, la cual es la declaración de la voluntad soberana tal como lo establece el Código Civil ecuatoriano.²⁹

Para algunos autores como Manuel Atienza la motivación consiste en: *“explicar o mostrar las causas de la decisión; o, también, aportar razones que permitan considerar una decisión como correcta o aceptable.”*³⁰

Según señala Fernando de la Rúa: *“La motivación de la sentencia constituye un elemento intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en que el juez apoya su decisión.”*³¹

Cabe citar lo que nos dice Zabala Baquerizo sobre la motivación quién nos explica su concepto y su función estableciendo que:

“La motivación constituye un juicio lógico que se desarrolla alrededor de la pretensión. El juez al momento de sentenciar debe exponer, a las partes y a la sociedad, las razones que han tenido para resolver en la forma constante en la parte dispositiva de la sentencia [...] Para estimar o desestimar la pretensión punitiva, el juez debe ponerla en relación con el derecho objetivo [...] Pero, además, en el caso que el juez estimare la pretensión punitiva, la motivación o parte lógica de la sentencia debe comprender también las causas de la calidad y de la cantidad de la pena, es decir, las razones por las cuales se impone el

²⁸ Dolcini Emilio, “Comentario breve al Codice Penale”. Cedam, cuarta edición. 2013, 516.

²⁹ Art 1 del Código Civil: la ley es una declaración de la voluntad soberana que, en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. [...].

³⁰ Atienza Rodríguez Manuel, “La Argumentación en materia de hechos. Comentario Crítico a las Tesis de Perfecto Andrés Ibáñez”. Revista jueces para la democracia. 1994, 516.

³¹ De La Rúa Fernando, “Teoría General del Proceso”. Editorial Depalma. Argentina, 2013, 146.

máximo o no se admite la variación o, en su defecto, se atenúa la pena. Por otro lado, si se estima la pretensión, se debe incorporar en la motivación el fundamento para establecer la calidad de la pena, o en su caso, la razón para que proceda la imposición de ciertas medidas de seguridad proyectadas inclusive para el tiempo posterior al de la ejecución de la condena.”³²

Finalmente, es necesario destacar que la Corte Constitucional ha establecido un concepto sobre la motivación y establece lo siguiente:

“Debe contener los elementos y razones de juicio que permitieren conocer cuáles fueron los criterios jurídicos esenciales que sirvieron para fundamentar la ratio decidendi; y [...] que la motivación tiene que contener una fundamentación en Derecho, la misma que no queda revestida con la mera enunciación de una simple emisión de una declaración de voluntad.”³³

La Constitución de la República del año 2008, en cuanto a los derechos de protección, establece en el artículo 76, dentro de las garantías del debido proceso, en el numeral 7, literal I):

Art. 76.- [...] Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.

I) Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

³² Zabala Baquerizo Jorge, “El Proceso Penal”. Edino Editorial. Guayaquil, 1990, 234.

³³ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 0228-14-SEP-CC.

Podemos concluir estableciendo de una manera sencilla que la motivación consiste en una explicación detallada por parte del juez de cada una de las razones que lo hayan llevado a decidir de una o de otra manera, para que tales decisiones sean conocidas por toda la sociedad en general y no solo por las partes dentro del proceso, lo cual coadyuva al control de las decisiones judiciales.

En cuanto a la finalidad de la motivación, esta es la de garantizar los derechos de los ciudadanos, debido a que los jueces deben emitir decisiones justas, es decir, tienen que explicar cuál ha sido aquel proceso *valorativo y lógico*³⁴ que los han conducido a dictar el fallo; evitando de esta manera la arbitrariedad en sus decisiones, permitiendo por tanto a las partes como la sociedad en general saber cuál ha sido aquel trayecto seguido por los jueces sin que se hayan cometido excesos de discrecionalidad o se haya cometido arbitrariedad.

El jurista Cordón Aguilar al analizar la motivación en su obra “La Motivación: Exigencia Constitucional”, cita lo que establece la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en cuanto a la finalidad de la motivación y dice:

*“El deber de motivar las resoluciones judiciales persigue los fines específicos siguientes: a) garantizar la posibilidad de control del fallo por los tribunales superiores, incluida la propia jurisdicción constitucional por vía del amparo; b) lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la “justicia y corrección” de aquella decisión judicial que afecte los derechos del ciudadano; y c) mostrar el esfuerzo realizado por el juzgador para garantizar una resolución carente de arbitrariedad”.*³⁵

³⁴ Espinosa Verónica, “Motivación de las resoluciones judiciales de casación civil y laboral dentro del debido proceso”. Tesis de grado. Programa de maestría en derecho procesal, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Quito, 2008, 29.

³⁵ Cordón Aguilar Julio, “La Motivación: Exigencia Constitucional”. Revista de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Guatemala, 2012, 4.

Existe una similitud cuando Chamorro Bernal en su obra nos cita lo que ha establecido el Tribunal Constitucional Español en cuanto a la finalidad de la motivación y dice que:

“La finalidad de la motivación en un Estado democrático de Derecho legitima la función jurisdiccional y, es múltiple ya que:

1°. Permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública, cumpliendo así con el requisito de publicidad.

2°. Logra el convencimiento de las partes, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de la resolución.

3°. Permite la efectividad de los recursos.

4°. Pone de manifiesto la vinculación del Juez a la ley”.³⁶

Finalmente nuestra Corte Constitucional se ha pronunciado respecto de la finalidad de la Motivación en las decisiones judiciales estableciendo lo siguiente:

“Esta exigencia persigue una doble finalidad, por una parte, controlar la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer una conclusión y además, garantizar el legítimo derecho de defensa de las partes, considerando que por esta requieren conocer los motivos de la decisión para determinar si están conformes con ella”.³⁷

Por lo analizado podemos concluir que el requisito de la motivación cumple con la finalidad de convencer a las partes de que la decisión judicial es la más justa y que está libre de arbitrariedades. Así mismo nos permite ejercer el derecho a

³⁶ Chamorro Bernal, “La Tutela Judicial Efectiva. Derechos y Garantías Procesales derivados del artículo 24.1 de la Constitución”. Bosch Casa Editorial S.A. Barcelona, 1994, 205.

³⁷ Corte constitucional del Ecuador. Sentencia No. 203-14-SEP_CC.

la defensa con una mayor facilidad al interponer los recursos que la ley prevea en caso de que las decisiones judiciales padezcan de errores o carezca de fundamentos. Por último cumple una función de publicidad permitiendo a la sociedad controlar aquellas resoluciones judiciales.

2.2. Breve reseña histórica de la motivación en el Ecuador.

Si nuestro ordenamiento jurídico tiene influencia del derecho romano, es necesario mencionar lo que sucedía en el antiguo imperio romano. En Roma los jueces no tuvieron la obligación de motivar o explicar sus fallos, debido a que las decisiones judiciales recaían en los patricios, es decir, en la nobleza del imperio y debido a su prestigio social los magistrados no estaban obligados a explicar la razón de sus decisiones.

Luego en la edad media predominó el derecho Justiniano el cual se desarrolló a través de la glosa, que consistía en el modo de razonar jurídicamente por el cual se acudía a proposiciones, las cuales contenían las reglas de la sentencia. Por lo tanto al momento de dictar el fallo bastaba con enunciar aquella proposición en la que se encontraba la regla y así el fallo o sentencia se consideraba motivada.

En la ley de las VII Partidas se encuentra ya indicios de la obligación de motivar las decisiones; teniendo particular atención la III Partida la cual establecía la obligación de indicar el por qué se tomó una orientación en uno u otro sentido al dictar el fallo.

Fue sin embargo, hasta la Revolución Francesa en el año de 1789 cuando se establece la obligación legal de motivar las sentencias, exigencia contenida en la Ley francesa del 24 de agosto de 1790; además, con esta exigencia se crea un argumento llamado la desconfianza en los jueces, razón por la cual estos deben dar explicación de sus decisiones. Posteriormente con reformas que se van dando a lo largo del siglo XVIII se establece con mayor fuerza aquella obligación que tienen los jueces de motivar sus resoluciones.



En nuestro país en el año de 1992 se lleva a cabo reformas constitucionales que ya sientan un precedente sobre aquellos principios de una verdadera realización de justicia. Así podemos apreciarlo en los siguientes artículos:

Art. 117: *El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. No se sacrificará ésta por la sola omisión de formalidades.*

Art. 119.- *Las Leyes procesales procurarán la simplificación, uniformidad, y eficacia de los trámites. Adoptarán, en lo posible, el sistema oral.*

El retardo injustificado en la administración de justicia será reprimido por la Ley y, en caso de reincidencia, constituirá motivo para la destitución del magistrado o juez, quien, además, será responsable de daños y perjuicios para con las partes afectadas.

Art. 121.- *Los juicios serán públicos, salvo los casos que la Ley señale, pero los tribunales podrán deliberar en secreto. En ningún juicio habrá más de tres instancias.*

Art. 122.- *Los organismos de la Función Judicial serán independientes en el ejercicio de sus funciones.*

Ninguna autoridad podrá interferir en los asuntos propios de aquellas.

Se establece la unidad jurisdiccional. Por consiguiente, todo acto administrativo generado por la administración central, provincial, municipal o de cualquier entidad autónoma reconocida por la Constitución y las Leyes podrá ser impugnado ante los correspondientes órganos de la Función Judicial, en la forma que determine la Ley.

Además con la expedición de la Ley de Modernización del Estado publicada en el Registro Oficial en el año de 1993, se establece lo siguiente:



Art. 31.-MOTIVACION.- *Todos los actos emanados de los órganos del Estado, deberán ser motivados. La motivación debe indicar los presupuestos de hecho y las razones jurídicas que han determinado la decisión del órgano, en relación con los resultados del procedimiento previo. La indicación de los presupuestos de hecho no será necesaria para la expedición de actos reglamentarios”.*

Pero es con la Constitución Política de la República del año 1998 que se establece expresamente esta obligación, así el artículo 24, numeral 13, establecía lo siguiente:

“Art. 24.- [...] *Las resoluciones de los poderes públicos que afecten a las personas, deberán ser motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se enuncian normas o principios jurídicos en que se haya fundado, y si no se explicare la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación del recurrente.”*

Por lo tanto, las resoluciones de los poderes públicos debían cumplir con la característica importante de la motivación, es decir, que además de las consideraciones de hecho y de derecho, se ha de explicar por qué se ha de aplicar una norma a los hechos materia del litigio.

Finalmente en la Constitución de la República que entró en vigencia en el año 2008, se vigoriza aún más esta obligación, así lo establece el Art 76, numeral 7, literal I, ya citado con anterioridad.

2.3. Las providencias judiciales y la obligación de la Motivación.

Podemos definir que las providencias judiciales son aquellas resoluciones dictadas por parte del juez y que tienen por objeto la ordenación material del

proceso.³⁸ Por estas el juez puede posibilitar la resolución de alguna petición de una parte o fija el cumplimiento de una cierta medida³⁹, es decir pueden crear, modificar o extinguir efectos procesales.

En las providencias judiciales se limitarán a expresar lo que por ellas se mande e incluirán además una sucinta motivación, además incluirán la mención del lugar y fecha en que se adopten y la indicación del tribunal que las dicte, con expresión del juez o magistrados que lo integren y su firma e indicación del nombre del ponente, cuando el tribunal sea colegiado.⁴⁰

Según Hernando Morales *“el punto central de los actos del juez precisamente son las providencias judiciales, que constituyen declaraciones emitidas por aquél, con el fin de determinar con fuerza obligatoria la voluntad de la ley en los casos concretos.”*⁴¹

Jarom Abinadi Paipa Garnica define a las providencias judiciales de la siguiente manera:

“Son actos que representan la manifestación de la voluntad del Estado, emitidas por un funcionario con competencia para proferirla (es decir; que a dicho funcionario se le ha delegado la función de administrar justicia en dicho caso), al interior de un proceso judicial. En otras palabras, podemos afirmar que el funcionario encargado de administrar justicia (juez), manifiesta su voluntad al interior del proceso mediante actos, los cuales, de manera general se denominan providencias. Dichas providencias pueden buscar dar fin al proceso

³⁸ Internet:<http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/providencia/providencia.htm>. Acceso: Febrero 2016.

³⁹ Internet: <http://definicion.de/providencia/> Acceso: Febrero 2016.

⁴⁰ Internet: <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/providencia/providencia.htm> Acceso: Febrero 2016.

⁴¹ Morales Molina Hernando, “Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General”. A.B.C. Editorial. Bogotá, 1983, 459.

(sentencias) o sólo impulsarlo hacia el fin que el proceso tiene (autos), el cual es resolver el problema jurídico objeto de juicio.”⁴²

Según Guillermo Cabanellas las providencias judiciales son *“toda decisión o providencia que adopta un Juez o Tribunal en el curso de una causa contenciosa o de un expediente de jurisdicción voluntaria, sea de oficio o a instancia de parte.”⁴³*

Para Carlos Estoehrel Maes las providencias judiciales son: *“Las declaraciones emanadas de los Tribunales de justicia sobre los puntos sometidos a su decisión. Ella expresan una actividad mediante la cual el Juez resuelve las peticiones de las partes o dispone medidas procesales.”⁴⁴*

Manuel Osorio nos dice que las providencias judiciales son *“Cualquiera de las decisiones, desde las de mero trámite hasta la sentencia definitiva, que dicta un Juez o Tribunal en causa contenciosa o en expediente de jurisdicción voluntaria”⁴⁵*

Ahora bien, debemos enfatizar que tanto los autos como las sentencias que son dictadas por los órganos jurisdiccionales deben cumplir con el requisito de la motivación, so pena de nulidad y así lo establece el Código Orgánico General de Proceso:

⁴² Paipa Garnica Jarom, “De las Providencias Judiciales”. Derecho Colombiano, sin Editorial. Bogotá, 2011, 1.

⁴³ Cabanellas Guillermo “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Heliasta Ediciones. Argentina, 2014, 188, 189.

⁴⁴ Estoehrel Maes Carlos, “De las disposiciones comunes a todo Procedimiento y de los incidentes”. Ediciones Chile, Quinta Edición. Chile, 2010, 93.

⁴⁵ Osorio Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales”. Heliasta Ediciones. Argentina, 1990, 672.



Artículo 89.- Motivación. *Toda sentencia y auto serán motivados, bajo pena de nulidad. No habrá tal motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos, que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas como a la interpretación y aplicación del derecho. La nulidad por falta de motivación única y exclusivamente podrá ser alegada como fundamento del recurso de apelación o causal del recurso de casación.*

Esta misma obligación la cumplen las sentencias constitucionales, así ocurre con la sentencia dictada en una Acción Extraordinaria de Protección la cual es objeto de nuestro estudio y se analizará con más detalle en el tercer capítulo.

2.4. El debido proceso y la garantía de la motivación.

El debido proceso es un conjunto de derechos, los cuales han sido consagrados en la Constitución y deben cumplirse no solo por las autoridades judiciales sino también por las autoridades administrativas, de tal manera que exista un proceso legítimo en el cual no se vulneren los derechos de los ciudadanos.

El debido proceso, entonces, tiene como finalidad la protección de los derechos reconocidos en la Constitución y también de aquellos consagrados por los instrumentos internacionales que versen sobre derechos humanos, procurando así evitar los abusos de poder por parte de las autoridades.

En cuanto a los procesos judiciales el debido proceso tiene un papel sumamente importante ya que estas garantías inexorablemente deben de ser acatadas por los órganos que administran justicia permitiendo de esta manera que el proceso que se lleva a cabo sea justo, equitativo y legal, permitiendo a

las partes ejercer el derecho a la defensa y a ser escuchados en el momento oportuno. Así lo ha establecido la Constitución en el Art. 169:

Art. 169.- *El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.*

En cuanto a la definición del debido proceso las tesis son variadas, pero entre las más importantes tenemos la del tratadista Eduardo Couture quien nos dice que el debido proceso es una *“Garantía constitucional que consistente en asegurar a los individuos la necesidad de ser escuchados en el proceso en que se juzga su conducta, con razonables oportunidades para la exposición y prueba de sus derechos”*⁴⁶

Según Alberto Suárez Sánchez, el debido proceso consiste en lo siguiente:

“El debido proceso consiste en que nadie puede ser juzgado sino de conformidad con la ritualidad previamente establecida, para que se cumpla aquel axioma de que nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio con la plenitud de las formalidades legales”.⁴⁷

Nuestra Corte Constitucional también ha definido al debido proceso y ha manifestado que:

“El debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda -legítimamente- imponer sanciones, cargas

⁴⁶ Cueva Carrión Luis, “El debido proceso”. Cueva Carrión Ediciones, Segunda Edición (ampliada y actualizada). Quito, 2013, 62.

⁴⁷ Suárez Sánchez Alberto, “El debido proceso penal”. Panamericana Editorial, Segunda Edición. Colombia, 2001, 193.

o castigos. Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales.”⁴⁸

Finalmente, al estar el debido proceso incorporado como una garantía constitucional será un derecho fundamental común a todas las personas sin discriminación de cualquier tipo, además de ser de inmediata y directa aplicación por cualquier servidor público, sea este administrativo o judicial; asegurando así el cumplimiento de una tutela judicial efectiva, mediante un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, pero además, que aquel fallo deba ejecutarse.

2.4.1. La garantía de la motivación en el debido proceso.

Son varias las garantías que conforman el debido proceso como así lo establece la Constitución de la República, sin embargo, solo nos centraremos en el análisis de la motivación ya que este compete al objeto de nuestro estudio. Como ya habíamos visto esta garantía se encuentra establecida en el Art 76, numeral 7, literal I de nuestra Constitución.

Esta garantía obliga a que todas las resoluciones, no solo las sentencias judiciales; de los poderes públicos deben estar motivadas, no haciendo mención solamente de la resolución adoptada sino además explicando cuáles han sido las normas jurídicas aplicables al caso en concreto. Si una resolución no cumple con aquello será nula por mandato constitucional.

Como se analizó anteriormente la motivación de las resoluciones judiciales permitirá el control de la legalidad no solo por los órganos competentes superiores sino también por la sociedad en general, evitando así que se comenten arbitrariedades por parte de los juzgadores, lo que dejaría a los

⁴⁸ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1263- 11-2001-CC

ciudadanos en total indefensión al no conocer los fundamentos y motivos que llevaron a los juzgadores a resolver de una u otra forma.

Finalmente, los jueces han de cumplir a cabalidad con sus atribuciones jurisdiccionales otorgadas no solo por la constitución y la ley, sino también por los instrumentos internacionales de derechos humanos; siendo una de esas atribuciones la de motivar todas sus resoluciones, enunciando la pertinencia de la aplicación de las normas a los antecedentes de hecho, caso contrario la nulidad afectaría a aquellas resoluciones.

2.5. Requisitos de la motivación.

Para que la motivación sea válida debe cumplir con varios requisitos o exigencias que de acuerdo a la doctrina procesal esta debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.⁴⁹

1. La motivación debe ser expresa.

En este punto, el juez ha de expresar cuales han sido los fundamentos que este ha adoptado para sustentar su resolución. Así lo establece la Constitución en su Art. 76, ya analizado anteriormente y así también lo establece ahora el Art. 89 del Código Orgánico General de Procesos que menciona: *“Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos, que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas como a la interpretación y aplicación del derecho.”*

Cuando se emite una sentencia, el juzgador debe hacer expresas las razones que respaldan el fallo al que se ha llegado. Este requisito es indispensable

⁴⁹ De la Rúa Jorge, "La Sentencia. Teoría General del Proceso". Editorial Depalma. Buenos Aires, 1991, 150.

para poder apelar, comprender el sentido del fallo y en líneas generales, para controlar las decisiones del Juez.⁵⁰

Existe además otra tesis que sostiene que la motivación al ser expresa impide que las sentencias judiciales no puedan ser suplidas por la remisión a otras sentencias o a otros textos contenidos en el expediente de la causa. Sin embargo, el juez puede acoger y reiterar las motivaciones contenidas en las sentencias recurridas, manifestándolo así en forma explícita, sin que existan dudas. Así lo establece el Código de Procedimiento Civil:

Art. 274.- *En las sentencias y en los autos se decidirán con claridad los puntos que fueren materia de la resolución, fundándose en la ley y en los méritos del proceso; a falta de ley, en precedentes jurisprudenciales obligatorios, y en los principios de justicia universal.*

Art. 276.- *En las sentencias y en los autos que decidan algún incidente o resuelvan sobre la acción principal, se expresará el asunto que va a decidirse y los fundamentos o motivos de la decisión.*

No se entenderá cumplido este precepto en los fallos de segunda instancia y de casación, por la mera referencia a un fallo anterior.

Finalmente y por lo analizado podemos concluir que la Motivación no puede ser tácita ni darse como sobreentendida, por lo que es necesario que sea expresa.⁵¹

2. La motivación debe ser clara.

Todas las decisiones que adopte el juez deben ser claras, es decir, deben ser comprensibles, no deben ser ambiguas, utilizando un lenguaje sencillo y

⁵⁰ Nekita, “La Motivación de las Sentencias y su sentido histórico”. Edición electrónica. Internet: <http://derecho-acotaciones.blogspot.com/2012/08/obligacion-de-motivar-las-sentencias.html>. Acceso: Marzo 2016.

⁵¹ Zepa Ignacio, “La comunidad de la prueba en la jurisprudencia reciente de la Sala de Casación Civil en Derecho Procesal Civil”. Hermanos Editores. Valencia, 1998, 53.

exacto, fácil de comprender para las partes y todos aquellos que lean sus resoluciones, sin llevarlos a distorsionar su contenido, de manera que no queden dudas de lo que el juez ha expresado en ellas.

Así también lo expresa el Código de Procedimiento Civil:

Art. 275.- *Los decretos, autos y sentencias expresarán con claridad lo que se manda o resuelve; y en ningún caso se hará uso de frases obscuras o indeterminadas como ocurra a quien corresponda, venga en forma, como se pide, etc.*

El Código Orgánico General de Procesos en cuanto a la claridad que debe tener la sentencia establece que:

Artículo 92.- *Congruencia de las sentencias. Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con los puntos materia del proceso. Resolverán sobre las peticiones realizadas por las partes y decidirán sobre los puntos litigiosos del proceso.*

Para Ignacio Zerpa la claridad en la sentencia implica que se exprese en forma clara los argumentos aportados para justificar la decisión. Además nos dice que la sentencia será nula cuando *“por la oscuridad de los conceptos que en ella se emplean, no resulte posible conocer a cabalidad el pensamiento del juzgador.”*⁵²

La claridad es un requisito de suma importancia, porque permite comprender su contenido al mayor número de personas sin importar su nivel cultural. Es por eso que la narración de los hechos debe ser clara, *donde no se invoquen tecnicismo sino más bien el relato debe ser sencillo, ordenado y fluido, con una*

⁵² *Ibíd.*, 205.

*carga descriptiva que recreen los hechos tal y como ocurrieron según el tribunal entiende.*⁵³

Ahora bien, el lenguaje jurídico representa un vehículo a través del cual, los ciudadanos pueden tener conocimientos del Derecho y esto en todas sus formas, es decir, no sólo cuando el Derecho adquiere el aspecto de normas elaboradas por los órganos constitucionales depositarios de la voluntad popular, sino también cuando asume las formas de resoluciones judiciales que aplican dichas normas al caso concreto. En ambos casos y desde ambas perspectivas la calidad del lenguaje jurídico es, sin ninguna duda, decisiva.⁵⁴

Finalmente la claridad de la motivación en las decisiones judiciales debería destacar por su propia naturaleza: la claridad del lenguaje jurídico en la exposición argumentos fundados en el Derecho.

3. La motivación debe ser completa.

Por lo que se debe abarcar todos los hechos y el derecho, estableciendo todas aquellas razones que han llevado al juzgador a tomar una decisión de una u otra manera. Se debe tener en cuenta la valoración crítica que se ha dado a las pruebas que las partes han presentado y que se han incorporado válidamente en el proceso; indicando las conclusiones a las que se ha llegado luego de la valoración de la prueba.

Por lo tanto, la motivación sobre los hechos está dada por la valoración que se hace sobre las pruebas y la fundamentación que se hace en derecho, a los cuales se les ha de aplicar las normas legales pertinentes.

⁵³Internet:<http://www.monografias.com/trabajos87/motivacion-juridica/motivacion-juridica.shtml>. Acceso: Abril 2016.

⁵⁴Milione Ciro, "El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el derecho a la claridad: reflexiones en torno a una deseada modernización del lenguaje jurídico". Edición electrónica.2015.
Internet:http://www.carmenparedes.com/JURISPRUDENCIA/jurisprudencia_1.pdf. Acceso: Marzo 2016.

El tratadista Jorge De la Rúa ha establecido sobre este requisito que:

“Respecto de los Hechos; debe contener las razones que llevan a una conclusión afirmativa o negativa sobre la existencia de los episodios de la vida real con influencia en la solución de la causa. Para ello, tiene que emplear las pruebas incorporadas al proceso, mencionándolas y sometiéndolas a valoración crítica.

El Juez debe consignar las conclusiones de hecho a que llega, y esta exigencia atañe ya a la fundamentación en derecho de la sentencia, porque constituirá la base de aplicación de la norma jurídica. La motivación en los hechos está constituida por la valoración probatoria, la fundamentación en derecho tiene como punto de partida la fijación de esos hechos.”⁵⁵

4. La motivación debe ser legítima.

La motivación será legítima cuando se base en pruebas legales y válidas. Hay que destacar sin embargo que la valoración *que hace el juez de estas pruebas tiene que ser total y sobre toda la prueba, pues la verdad a medias, es falsedad.*⁵⁶

Respecto de la prueba el Código Orgánico General de Procesos menciona que:

Artículo 158.- Finalidad de la prueba. *La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos.*

Artículo 164.- Valoración de la prueba. *Para que las pruebas sean apreciadas por la o el juzgador deberá solicitarse, practicarse e incorporarse dentro de los términos señalados en este Código.*

⁵⁵ De la Rúa Jorge, Obra Citada, 154.

⁵⁶ Espinosa Verónica, Obra Citada, 47.

La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos.

La o el juzgador tendrá obligación de expresar en su resolución, la valoración de todas las pruebas que le hayan servido para justificar su decisión.

Para Jorge De la Rúa la motivación debe estar basada en pruebas que sean legales y válidas, señalando que la motivación es ilegítima cuando se sirve de pruebas que no han sido incorporadas en el proceso o cuando se omite la consideración de una prueba esencial que ha sido incorporada.⁵⁷

Es por eso que para que exista legitimidad en la motivación, la valoración que se ha de hacer a la prueba debe ser correcta, no debe ser absurda o arbitraria, sino debe ser verdadera, respetando tanto los principios de valoración como las reglas de la lógica, y existe ilegitimidad de la motivación cuando el juzgador prescinde de pruebas esenciales, computa pruebas inexistentes o valora pruebas inválidas.⁵⁸

Sin embargo el juez está facultado a realizar presunciones las cuales son reconocidas como un medio de prueba por el Código Orgánico General de Procesos en el Art. 172, y mediante las cuales el Juez realiza un razonamiento en base a los indicios que han sido debidamente acreditados por las partes, sin embargo cualquiera de las contrapartes pueden desvirtuarlas; y es por esto que no generan inseguridad jurídica al ser valoradas objetivamente.

En la obra de Villalobos, se cita la definición que da Bello Lozano sobre las presunciones judiciales y nos dice que son:

⁵⁷ De la Rúa Jorge, Obra Citada. 1991, 155.

⁵⁸ Espinosa Cueva Karla, "Teoría de la motivación de las resoluciones judiciales y jurisprudencia de casación y electoral". Tribunal Contencioso Electoral, V&M Gráficas, primera edición. Quito, 2008, 48.

“Las derivadas del criterio del juez, mediante el cual éste deviene un resultado lógico al dar por conocido un hecho que no lo era mediante la percepción de otro, que si le es conocido.”⁵⁹

De acuerdo con el Doctor Raymundo Gama Leyva “la presunción simple se concibe de este modo como un instrumento cognoscitivo de carácter inmediato e indirecto que es utilizado por el Juez para la determinación de los hechos”⁶⁰

Por su parte el Código Orgánico General de Procesos en cuanto a las presunciones judiciales establece lo siguiente:

Artículo 172.- Presunción judicial. Los actos, circunstancias o signos suficientemente acreditados a través de la prueba y que además sean graves, precisos y concordantes, adquieren significación en su conjunto cuando conducen unívocamente a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias expuestos por las partes con respecto a los puntos controvertidos. Por lo tanto, la o el juzgador puede resolver la controversia sobre la base de estas conclusiones que constituyen la presunción judicial.

Y es que con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos se ha logrado un gran avance en cuanto a las presunciones judiciales como medio de prueba, ya que además, el mismo artículo establece que las presunciones judiciales deben cumplir con tres requisitos que son: *graves, precisas y concordantes*.

⁵⁹ Villalobos, Lisbeth. Las presunciones como medios probatorios. Trabajo de grado. Doctorado en Derecho de la Universidad de Zulia. Venezuela, 56.

⁶⁰ Gama Raymundo. Concepciones y tipología de las presunciones en el derecho continental. Revista de estudios y Justicia. 2013.

Es necesario mencionar que al inicio del debate sobre el Libro III del Código de Procesos en el pleno de la Asamblea, el Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino, señaló que el título segundo de las pruebas resulta *“fundamental para justificar los fundamentos de hecho y de derecho, de una acción planteada o para desvanecer esas pretensiones del actor por parte de él o de los demandados o para justificar una reconvencción.”*⁶¹

Finalmente las presunciones judiciales en nuestro ordenamiento jurídico son valoradas a través del sistema de la sana crítica. Al respecto la ex Corte Suprema de Justicia manifestó lo siguiente:

*“La valoración de la prueba es una operación mental en virtud de la cual el juzgador determina la fuerza de convicción, en conjunto, de los elementos de prueba aportados por las partes, para inferir si son ciertas o no las afirmaciones hechas tanto por el actor como por el demandado, en la demanda y la contestación a la demanda, respectivamente. Esta operación mental de valoración o apreciación de la prueba es potestad exclusiva de los jueces y tribunales de instancia y deben hacerlo aplicando, como dice la ley, las reglas de la sana crítica, o sea aquellos conocimientos que acumulados por la experiencia y que, en conformidad con los principios de la lógica, le permiten al Juez considerar a ciertos hechos como probados. El Tribunal de Casación no tiene atribuciones para hacer una nueva valoración de la prueba, sino únicamente para comprobar si en la valoración de la prueba se han violado o no las normas de derecho concernientes a esa valoración, y si tal violación ha conducido indirectamente a la violación de normas sustantivas en la sentencia.”*⁶²

⁶¹ ASAMBLEA NACIONAL. “Libro III del COGEP transformará el sistema probatorio del país”: Mauro Andino. Internet. <http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/libro-iii-del-cogep-transformara-el-sistema-probatorio-del>. Acceso: 9 de Noviembre de 2015

⁶² Corte Suprema de Justicia del Ecuador. Resolución No. 83-99, Registro Oficial No. 159, 30 de marzo 1999.

Existe concordancia con lo que establece el Código de Procedimiento Civil que dice:

Art. 115: *La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas.*

5. En la motivación debe existir lógica.

La motivación ha de ser coherente por lo que debe cumplir con las reglas de la lógica, habiendo una relación entre la valoración que se ha dado a las pruebas y a la o las decisiones que se ha adoptado por parte del juez, por lo tanto, el juez debe estar sujeto a las reglas de la sana crítica al momento de realizar el análisis de la pruebas. De esta manera la sentencia será coherente y sus afirmaciones guardarán una correlación adecuada; inequívoca, no dejando dudas sobre las conclusiones a las que llega, por lo que no esta no será contradictoria.

Según Ignacio Zerpa, es necesario que la motivación contenida en una sentencia esté debidamente razonada con respeto a las reglas del recto pensar y el juez ha de someterse a las pautas que irá proporcionando la lógica, sobre todo teniendo en cuenta aquellas pautas particulares que se emplean en el campo jurídico, por lo tanto esta será coherente, por lo que no habrá contradicción en aquella; además debe ser derivada, por lo que respetará el principio de razón suficiente; y la motivación debe ser adecuada a las normas de la psicología y de la experiencia común.⁶³

⁶³ Zerpa Ignacio, Obra Citada, 205.

Capítulo 3

El derecho a la motivación desarrollado por la Corte Constitucional en Acciones Extraordinarias de Protección.

3.1. Teorías desarrolladas por la Corte Constitucional sobre el derecho a la motivación.

Como ya habíamos analizado anteriormente, por mandato constitucional según lo establece el Art. 76 numeral 7, literal I, impone que todas las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas, sean estas administrativas o judiciales; explicando cuales son aquellos argumentos que ha adoptado la autoridad para llegar a un tipo de decisión, pero además explicando la pertinencia de la aplicación de las normas a los antecedentes de hecho, caso contrario, si no se cumple con este requisito debidamente, aquellas resoluciones serán nulas y además se impondrá una sanción a los servidores públicos que sean los responsables.

Ahora bien, además de la Constitución y el Código Orgánico General de Procesos, analizados anteriormente, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ha determinado en el Art. 4 numerales 9 y 10 lo siguiente:

Art. 4.- (...) 9. *Motivación.- La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso.*

10. *Comprensión efectiva.- Con la finalidad de acercar la comprensión efectiva de sus resoluciones a la ciudadanía, la jueza o juez deberá redactar sus sentencias de forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética, incluyendo las cuestiones de hecho y derecho planteadas y el razonamiento seguido para tomar la decisión que adopte. (...).*

La motivación implicará por lo tanto la explicación de una manera detallada y ordenada de todas las razones que han llevado a la autoridad judicial a emitir su decisión, erigiéndose así como la mayor garantía para la correcta administración de justicia.

Es por eso que, en su actividad jurisdiccional, el juez no puede decidir arbitrariamente, tiene que cumplir el mandato constitucional y como lo ha establecido la Corte Constitucional:

“Está obligado a razonar de manera explícita las decisiones que adopta, destinadas a defenderse por sí mismas y discutir las con conocimiento de la causa, amparadas en las normas o principios jurídicos que justifique la adopción de la resolución, es decir, debe explicar la pertinencia de aplicación de las normas a los antecedentes de hecho; si se omite aquel deber constitucional, ipso iure carece de eficacia y será considerado nulo por mandato de la Constitución de la República.”⁶⁴

La Corte Constitucional también ha dicho lo siguiente sobre la labor que tienen los jueces a la hora de motivar sus resoluciones:

“La motivación impone al juez el deber de expresar en la sentencia los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan lo decidido. Esta exigencia persigue una doble finalidad por una parte, controlar la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer una conclusión y además, garantizar el legítimo derecho de defensa de las partes, considerando que estas requieren conocer los motivos de la decisión para determinar si están conformes con ella.”⁶⁵

⁶⁴ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No 101-15-SEP-CC-2015.

⁶⁵ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 203-14-SEP-CC, Caso N.º 0498-12-EP.

Por lo tanto las resoluciones judiciales, sean estas autos o sentencias que emiten los jueces deben reflejar fielmente el cumplimiento de esta obligación, debido a que la motivación es la piedra angular de todas las decisiones judiciales. Sobre todo en las sentencias emitidas por la Corte Constitucional en Acciones Extraordinarias de Protección que tiene como objetivo la tutela de los derechos consagrados en la constitución, la tutela de las normas del debido proceso y además que se respeten los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales.

El principio de motivación en las sentencias constitucionales garantiza además que la Corte Constitucional, que es el órgano encargado del control concentrado de constitucionalidad y de la interpretación jurisdiccional de la Constitución actúe apegado a los preceptos contenidos en ella, respetando por ende las garantías constitucionales de cada ciudadano frente al poder estatal.

Ahora bien, corresponde analizar cuáles son las tesis o las teorías que han sido desarrolladas por la Corte Constitucional acerca del derecho a la motivación. Nuestra Corte Constitucional ha desarrollado jurisprudencia sobre el derecho a la motivación, estableciendo lo siguiente tanto en las sentencias 025-09-SEP-CC, 0023-09-EP, 0024-09-EP y 0025-09-EP, las cuales han sido citadas en sentencias posteriores emitidas por la Corte Constitucional y dicen así:

“Una de las tareas primordiales de fundamentar toda sentencia o acto administrativo es la de proporcionar un razonamiento lógico y comprensivo, de cómo las normas y entidades normativas del ordenamiento jurídico encajan en las expectativas de solucionar los problemas o conflictos presentados, conformando de esta forma un derecho inherente al debido proceso, por el cual el Estado pone a disposición de la sociedad las razones de su decisión.”⁶⁶

⁶⁶ Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, Sentencia N.º 025-09-SEP-CC, casos N.º 0023-09-EP, 0024-09-EP y 0025-09-EP (Acumulados).

Pero la Corte Constitucional ha ido complementando esta jurisprudencia y en la sentencia 227-12-SEP-CC ha manifestado que:

*“Para que determinada resolución se halle correctamente motivada es necesario que la autoridad que tome la decisión exponga las razones que el Derecho le ofrece para adoptarla. Dicha exposición debe hacérsela de manera **razonable, lógica y comprensible**, así como mostrar cómo los enunciados normativos se adecúan a los deseos de solucionar los conflictos presentados. Una decisión **razonable** es aquella fundada en los principios constitucionales. La decisión **lógica**, por su lado, implica coherencia entre las premisas y la conclusión, así como entre ésta y la decisión. Una decisión **comprensible**, por último, debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del gran auditorio social, más allá de las partes en conflicto.”⁶⁷*

Así mismo de manera coincidente la Corte Constitucional ha emitido lo siguiente:

*“La motivación de las resoluciones de poderes públicos y más aún de los órganos jurisdiccionales, constituyen una garantía esencial para evitar la arbitrariedad y lograr el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas. Conforme lo ha señalado la Corte Constitucional en múltiples fallos, la exposición por parte de la autoridad judicial con respecto a la decisión adoptada debe hacérsela de forma; i. **Razonable**, es decir que sea fundada en los principios constitucionales; ii. **Lógica**, lo cual implica una coherencia entre las premisas y la conclusión y, iii. **Comprensible**, es decir que el fallo goce de claridad en el lenguaje.”⁶⁸*

⁶⁷ Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia N.º 227-12-SEP-CC, caso No. 1212-12-Ep.

⁶⁸ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 092-13-SEP-CC, caso No. 0538-1i-EP.

Por lo tanto, la Corte Constitucional ha establecido que la garantía de la motivación debe cumplir con los siguientes presupuestos: 1) Razonabilidad; 2) Lógica; y, 3) Comprensibilidad; sin embargo, también se ha establecido por parte de la Corte Constitucional que *tales requisitos no son concurrentes, es decir, bastará que uno de ellos no se haya cumplido dentro de la sentencia o el auto en análisis, para determinar que la misma carece de motivación y como tal vulnera el derecho al debido proceso.*⁶⁹

Corresponde ahora analizar detalladamente cada uno de estos presupuestos.

1. La razonabilidad:

La Corte Constitucional sobre la razonabilidad ha expuesto lo siguiente:

*“La razonabilidad implica que la decisión se encuentre fundada en normas constitucionales y en normas legales que sean pertinentes al caso concreto, y que en tal virtud los argumentos del órgano judicial no contradigan estas.”*⁷⁰

Por lo tanto, la razonabilidad parte del fundamento argumentativo de los principios y las normas constitucionales, permitiendo de esta manera obtener una tutela efectiva que consiste en que la resolución debe ser dictada en armonía a los preceptos constitucionales y legales que integran nuestro ordenamiento jurídico, pero estas deben ser pertinentes al caso en concreto.

La Corte Constitucional además ha establecido sobre la razonabilidad que:

“La razonabilidad debe responder también a la aplicación de los precedentes fijados en casos análogos, en respuesta al derecho de igualdad, es decir, dicho elemento de razonabilidad no agota su presencia solamente en el anuncio de las normas

⁶⁹ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 203-14-SEP-CC, Caso N.º 0498-12-EP.

⁷⁰ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 167-14-SEP-CC, Caso N.º 1644-11-EP.

*constitucionales, sino más bien corresponde a la relación de los hechos, con el sentido garantista de los argumentos utilizados en el texto de las sentencia o auto.*⁷¹

Con este criterio dictado por la Corte Constitucional se debe tener en cuenta que, en los casos donde los presupuestos de hecho y de derecho encierren un mismo escenario jurídico, el precedente representará la razón de la decisión -ratio decidendi- frente a dichos enunciados. La aplicación de esa razón en casos posteriores -símbles- en apego al principio de igualdad, se deberá interpretar como fallos confirmadores.⁷²

De acuerdo con lo que dice el tratadista Rodolfo Piza Escalante es necesario que:

*“Los actos de autoridad requieren para su validez, no sólo haber sido promulgados por órganos competentes y procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su concordancia con la normas, principios y valores supremos de la Constitución (formal y material), como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., que se configuran como patrones de razonabilidad. Es decir que un acto público es válido cuando, además de su conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología constitucional. De esta manera se procura, no solo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con el objeto.”*⁷³

Para Francisco Chamorro Bernal la motivación de la resolución judicial supone una justificación racional, no arbitraria de la misma, mediante un razonamiento no abstracto sino concreto. Esta justificación de la resolución deberá incluir: a)

⁷¹ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 030-15-SEP-CC, Caso No. 0849-13-EP

⁷² Corte Constitucional. Sentencia No. 030-15-SEP-CC, Caso No. 0849-13-EP, pág. 13.

⁷³ Escalante Piza Rodolfo, “Sentencia sobre el debido proceso. Revista de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 1992, 17.

El juicio lógico que ha llevado a seleccionar unos hechos y una norma; b) La aplicación razonada de la norma; c) La respuesta a las pretensiones de las partes y a sus alegaciones relevantes para la decisión.⁷⁴

Finalmente se debe tener en cuenta que la razonabilidad tal como lo ha dicho la Corte Constitucional es el elemento mediante el cual es posible analizar las normas que han sido utilizadas como fundamento de la resolución judicial.⁷⁵

2. Lógica.

En cuanto al presupuesto de la lógica la Corte Constitucional ha señalado que:

“Por su parte, la lógica exige que las decisiones judiciales se encuentren estructuradas en un orden lógico, es decir, que exista una debida coherencia entre las premisas que conforman una decisión, las cuales deberán guardar relación con la decisión final del caso.”⁷⁶

Para analizar este elemento es preciso señalar que el desarrollo de una sentencia supone un silogismo, esto es, un razonamiento jurídico por el cual se vinculan las premisas mayores (que generalmente son proporcionadas por la normativa aplicable al caso en concreto) con las premisas menores (que se encuentran dadas por los hechos fácticos en los cuales se circunscribe y fundamenta la causa) y de cuya conexión se obtiene una conclusión (que se traduce en la decisión final del proceso).

En este punto ha existido una reiteración por parte de la Corte Constitucional al señalar que la lógica es el resultado de la coherencia materializada en la interrelación que surge entre las premisas fácticas, las normas aplicables al caso en concreto y la posterior decisión.

⁷⁴ Chamorro Bernal Francisco, Obra Citada, 1994, 208.

⁷⁵ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 009-14-SEP-CC.

⁷⁶ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 167-14-SEP-CC, Caso N.º 1644-11-EP.

Ahora bien, esta interrelación se identifica con la línea de causalidad que mantiene una sentencia, la misma que se configura con la presencia de una causa (premisas fácticas) vinculadas a determinados efectos (aplicación de normas). Este ejercicio finalizará con la decisión, la cual conecta en forma racional las premisas fácticas con la conclusión.⁷⁷

El requisito de lógica en la motivación implica la construcción de una decisión judicial entendida como una integralidad jurídica armónica, compuesta de premisas coherentes y concatenadas entre sí, y que como consecuencia de tal coherencia, el resultado es una conclusión que se sustenta en aquella construcción de fórmulas argumentativas interconectadas. De este modo, dicha integralidad jurídica debe excluir fórmulas de argumentaciones oscuras, erráticas, incoherentes, incompletas o inconsistentes; en definitiva, ilógicas.

De acuerdo a lo que sostiene Ignacio Zerpa la lógica implica que:

*“La motivación debe estar formada por un conjunto armonioso de razonamientos, formulados sin violar los principios básicos del pensamiento lógico, a saber, de identidad, de no contradicción y de tercero excluido. Expresado en otras palabras, la motivación debe ser congruente, no contradictoria e inequívoca.”*⁷⁸

Para Chamorro Bernal sin la existencia de la lógica existiría arbitrariedad algo contrario a la motivación, ya que no se expondría la causa de la decisión si no que se expondría una causa ilógica, irracional o basada en razones no atendidas jurídicamente; por lo que aquella resolución se dictará en base a la voluntad o capricho del que la toma, como un puro voluntarismo.⁷⁹

⁷⁷ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 0228-14-SEP-CC, Caso N.º 1815-11-EP.

⁷⁸ Zerpa Ignacio, Obra Citada, 206.

⁷⁹ Chamorro Bernal Francisco, Obra Citada, 207.

3. La comprensibilidad.

Como ya se analizó en el segundo capítulo todas las decisiones adoptadas por los Jueces deben contener un lenguaje claro, sencillo, exacto y fácil de entender para toda la sociedad en general, ya que en la generalidad de casos no tienen conocimiento sobre el lenguaje jurídico, de ahí la importancia de la claridad en el lenguaje, evitando los conceptos oscuros o ambiguos.

En cuanto al requisito de la comprensibilidad en la motivación la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente:

“La comprensibilidad establece que las decisiones judiciales tienen que ser elaboradas en un lenguaje claro y legible, que pueda ser asimilado efectivamente, no solo por las partes procesales, sino también por toda la sociedad en general.”⁸⁰

Por este criterio constitucional todo operador de justicia ha de emplear un lenguaje claro y pertinente que permita una correcta y completa comprensión de las ideas que están contenidas en una determinada resolución judicial.

Es por eso que la Corte Constitucional ha afirmado en reiteradas ocasiones que la claridad del lenguaje es un deber que tienen que cumplir todos los órganos judiciales en el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales.

Por lo tanto, el lenguaje jurídico que se emplea se constituye en un vehículo por el cual todos los ciudadanos en general adquieren conocimiento del derecho.

Así, en toda resolución judicial la comprensibilidad implicará una utilización adecuada del lenguaje, permitiendo una clara y correcta comprensión de las razones expuestas por el juzgador, esto permitirá por lo tanto que la redacción de la sentencia se convierta en un instrumento de fácil discernimiento y fiscalización del auditorio que será la sociedad.

⁸⁰ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 167-14-SEP-CC, Caso N.º 1644-11-EP.

El requisito de la comprensibilidad se encuentra también establecido en el artículo 4 numeral 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando se indica como uno de los principios procesales de la justicia constitucional la comprensibilidad efectiva, y se señala que :

"Con la finalidad de acercar la comprensión efectiva de sus resoluciones a la ciudadanía, la jueza o juez deberá dictar sus sentencias de forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética, incluyendo las cuestiones de hecho y derecho planteadas y el razonamiento seguido para tomar la decisión que adopte".

La Corte Constitucional en jurisprudencia ha señalado que para que una resolución sea comprensible, esta tiene que gozar de claridad en el lenguaje, lo que significa que exista una concatenación entre las premisas que contiene un pensamiento o idea con las conclusiones connaturales que deben devenir de aquel; pero este ejercicio intelectual requiere también ser fiscalizado por quienes no han sido parte del proceso, de modo que las resoluciones emitidas por los órganos judiciales gocen de legitimidad y permitan conocer al colectivo social en general, la forma como sus tribunales de justicia razonan y resuelven los conflictos que son puestos en su conocimiento, pero insistiendo que estos se ha de hacer de una manera comprensible y justificada.⁸¹

De acuerdo a lo establecido por Beatriz Franciskovic la motivación del Juez así como la fundamentación de la sentencia, debe expresarse de tal manera que pueda ser verificada, esto es que los motivos deban ser claros y expresos, lo cual proscribire toda formulación manifestada en lenguajes oscuros, vagos y ambiguos o tácitos.⁸²

⁸¹ Corte Constitucional. Sentencia No. 044-14-SEP-CC, Caso No. 0592-11-EP.

⁸² Franciskovic Ingunza Beatriz y Torres Angulo Carlos, Obra Citada, 43.

Finalmente luego de haber realizado este análisis, cabe concluir que existe un criterio uniforme por parte de la Corte Constitucional al efectuar el test de motivación de las resoluciones judiciales en el que se señala en reiteradas ocasiones que para que una resolución judicial se halle motivada es necesario que se expongan las razones que el derecho le ofrece para adoptarla. Dicha exposición debe hacérsela de manera razonable, lógica y comprensible, así como mostrar los enunciados normativos que se adecúan a los deseos de solucionar los conflictos presentados.

3.2. Análisis de casos prácticos de Acciones Extraordinarias de Protección resueltas por la Corte Constitucional.

- Sentencia N.º 025-16-sep-cc, caso N.º 1816-11-EP. Corte Constitucional del Ecuador.

Sentencia dictada en Quito, el 27 de enero de 2016.

El 4 de octubre de 2011, el doctor Galo Alfredo Chiriboga Zambrano en calidad de Fiscal General y como tal, representante legal de la Fiscalía General del Estado presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 6 de septiembre de 2011, por los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso No. 252-2008, mediante el cual resolvieron rechazar el recurso de casación previamente interpuesto.

Decisión impugnada:

La decisión judicial impugnada es la sentencia dictada el 6 de septiembre de 2011 por los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, en la que se rechaza el recurso de casación interpuesto por el doctor Alfredo Alvear Enríquez, director nacional de asesoría jurídica, subrogante del señor Ministro Fiscal General del Estado.

Argumentos del legitimado activo:

El accionante alega que la sentencia impugnada, dictada por los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, vulneró su derecho al debido proceso en la garantía de la motivación y el derecho a la seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 7 numeral 7 literal I y 82 de la Constitución de la República respectivamente.

Pretensión concreta:

Que en sentencia se disponga por parte de la Corte Constitucional la reparación integral de los derechos constitucionales vulnerados, declarando quede sin efecto la sentencia emitida por los Jueces y el Conjuez Permanente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.

Contestación a la demanda por parte de los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo:

La sentencia de casación de mayoría, objeto de la acción extraordinaria de protección, y el voto salvado, los expidió la Sala conformada por los Doctores Freddy Ordoñez Bermeo, Manuel Yépez Andrade y Clotario Salinas Montaña, en ejercicio de la jurisdicción y competencia que le otorga la Constitución de la República y la Ley de Casación. En el texto de dichas providencia constan claramente expuestos, los fundamentos facticos y jurídicos.

Consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional se declara competente para conocer y resolver las acciones extraordinarias de protección, contra sentencias, autos y resoluciones con fuerza de sentencia.

En cuanto al legitimado activo, se encuentra legitimado para interponer la presente acción extraordinaria de protección.

La Corte Constitucional determina 2 problemas jurídicos en concreto para resolver el caso:

1. La sentencia dictada el 6 de septiembre de 2011, por los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación N.º 252-2008, ¿vulnera el derecho constitucional a la seguridad jurídica?

La Corte Constitucional analiza el caso sub judice mencionando que se puede advertir que la institución accionante presentó recurso de casación ante el Tribunal Distrital N.º 1 de lo Contencioso Administrativo, quien mediante auto, concedió el mismo y dispuso que se eleve el proceso a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. En ese sentido, el prenombrado órgano, luego de realizar el correspondiente análisis, admitió a trámite el recurso de casación.

La Corte Constitucional en la sentencia N.º 167-14-SEP-CC, ha señalado lo siguiente: "... *la Ley de Casación estructura al recurso de casación en cuatro fases, a saber: 1) Calificación; 2) Admisibilidad; 3) Sustanciación y 4) Resolución.*⁸³

En cuanto a la calificación nos dice que corresponde al órgano judicial que dictó la sentencia o el auto a casar realizar el examen para determinar si se cumple con los requisitos del artículo 7 de la Ley de Casación, esto es: 1) Si la sentencia o auto objeto del recurso es de aquellos contra los cuales procede el mismo; 2) Si se ha interpuesto en el tiempo determinado en la ley y, 3) Si el escrito mediante el cual se lo deduce reúne los requisitos señalados en el artículo 6 de la Ley ibídem. Ante lo cual, con exposición detallada de los fundamentos o motivos de la decisión, admitirá o negará el recurso, en el término de tres días.

Respecto de la admisibilidad, la Ley de Casación en su artículo 8, señala que concedido el recurso de casación, el mismo juez u órgano judicial dispondrá que se obtengan las copias necesarias para la ejecución de la sentencia o auto y en la misma providencia, ordenará que se eleve el expediente a la Corte Nacional de Justicia.

⁸³ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 167-14-SEP-CC, Caso N.º 1644-11-EP.

Una vez recibido el proceso, dentro del término de quince días, y designada la Sala respectiva de la Corte Nacional de Justicia, examinará si el recurso de casación ha sido debidamente concedido, como una suerte de revisión de la fase anterior, de conformidad con lo que dispone el artículo 7 de la Ley ibídem y en la primera providencia declarará si admite o rechaza el recurso de casación si lo admite a trámite, procederá conforme lo previsto en el artículo 13 de la Ley de la Materia y si lo rechaza, devolverá el proceso al inferior.

Superada esta etapa y por ende, declarada la admisión del recurso de casación el proceso entra en la fase de sustanciación, en la que la Sala, al recibir el proceso en el término de diez días, notificará a las partes, a fin de que en cinco días hábiles den contestación al mismo e incluso soliciten la realización de audiencia pública, de ser pertinente.

La última fase es la de resolución en la cual la Ley de Casación señala en su artículo 16 primer inciso, que: "Si la Corte Suprema de Justicia encuentra procedente el recurso, casará la sentencia o auto de que se trate y expedirá el que en su lugar correspondiere, y por el mérito de los hechos establecidos en la sentencia o auto".

Es decir, en esta fase, la Sala de Casación debe realizar un análisis de fondo de la sentencia o auto recurrido, a fin de determinar, si se incurrió o no en una vulneración a la normativa jurídica alegada y de ser procedente, casar la sentencia o auto de que se trate y expedir el que en su lugar correspondiere.

En la fase resolutive del recurso, los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, al expedir su sentencia, señalaron que "es obligación del casacionista identificar las causales contenidas en el artículo 3 de la Ley de Casación y en relación a ella cumplir con el mandato del numeral cuatro del artículo 6 ibídem y señalar con toda claridad y exactitud la norma o normas jurídicas violadas", concluyendo que el recurso interpuesto se ha limitado a enunciar únicamente normas que han sido vulneradas por el vicio de errónea interpretación, realizando de esta manera un examen de admisibilidad nuevamente, en contraposición a lo establecido en el numeral 4 del artículo 6, que hace referencia a que el análisis de la

fundamentación del recurso, corresponde realizarlo en las fases de calificación y admisibilidad.

En este sentido, los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia incumplieron su obligación de analizar el fondo del asunto controvertido, lo cual corresponde a la fase de resolución en razón de que las etapas de calificación y admisibilidad precluyeron, y en las que el recurso fue admitido por reunir los requisitos formales exigidos en la ley.

Por eso la Corte Constitucional resuelve sobre este primer problema jurídico estableciendo que se evidencia que dicha decisión vulnera el derecho a la seguridad jurídica, contemplado en el artículo 82 de la Constitución de la República.

2. La sentencia dictada el 6 de septiembre de 2011, por los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia dentro del recurso de casación N.º 252-2008, ¿vulnera el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación?

La Corte Constitucional establece que la motivación, como garantía del debido proceso, contiene tres criterios para su cumplimiento efectivo que deben verificarse: **razonabilidad, lógica y comprensibilidad.**

a). La razonabilidad.

La Corte Constitucional se pronuncia sobre este punto que los jueces de la Sala basan su análisis en disposiciones atinentes a la fase de admisibilidad del recurso de casación, si esta cumplió con los requisitos del artículo 6 de la Ley de Casación, norma atinente a la fase de calificación y admisibilidad, que no es aplicable para la etapa de resolución por el principio de preclusión procesal, sin considerar que el mismo, ya había sido admitido, correspondiendo hacer un estudio de fondo de la decisión impugnada por el recurrente.

La Corte Constitucional respecto de la preclusión procesal, manifestó lo siguiente: *"La preclusión procesal es principio general del derecho, por el cual*

las etapas procesales se van cerrando sucesivamente, es decir, la posibilidad de contradicción de las partes en las fases procesales una vez evacuadas se cierran inevitablemente y no es posible volver atrás, ya que hacerlo implicaría un desbalance procesal entre los contendientes.”⁸⁴

Es así que conforme a este principio se asegura, no solo el respeto a las etapas existentes en un proceso, ocasionando que el cierre sucesivo de estas no hagan posible volver a revisarlas nuevamente, sino que además se garantiza la observancia de las normas jurídicas aplicables a cada una de las fases, lo cual genera certidumbre de que el ordenamiento jurídico será aplicado correctamente, en definitiva, da certeza de seguridad jurídica en la tramitación de un proceso.

La Corte Constitucional sostiene que no se cumple con el criterio de la razonabilidad, por cuanto el análisis y fundamentación de su decisión se sustenta en normas que no son pertinentes a la fase resolutoria del recurso de casación.

b). La Lógica.

Tomando como punto de partida el análisis de la razonabilidad sobre la argumentación expuesta erróneamente por los jueces, esta no guarda coherencia con la materia sobre la cual debe decidirse en la etapa de resolución, puesto que el recurso de casación ya había sido admitido anteriormente, por lo que correspondía analizar si el fallo recurrido adolecía de falta de aplicación o violación de la ley.

La Corte Constitucional menciona que la decisión no se encuentra estructurada de forma congruente y sistemática, ya que las premisas que la conforman, no mantienen un orden coherente, llegando a la conclusión de que ésta no guarda relación con los hechos del caso y las normas aplicables a este, lo que demuestra que carece del criterio lógico que debe tener toda decisión judicial.

⁸⁴ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 031-10-SNC-CC, acumulados 0044-10- CN, 0045-10- CN, 0046-10- CN y 0047-10- CN.

c). La Comprensibilidad.

La Corte Constitucional establece que la sentencia impugnada, al carecer de razonabilidad, lógica y coherencia, en razón de la falta de argumentación razonada para adoptar la decisión, no es clara ni concreta respecto de las cuestiones que se debía resolver en el recurso de casación; por tanto, los términos y el lenguaje empleados en la decisión judicial tampoco ostentan claridad ni inteligibilidad, impidiendo su fácil comprensión e incumpliendo con el criterio referente a la comprensibilidad.

La Corte Constitucional concluye que la sentencia dictada por los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, no cumple con los criterios constitucionales de razonabilidad, lógica y comprensibilidad que debe contener toda resolución judicial; es decir, no se encuentra debidamente motivada. Por lo cual, la Corte Constitucional considera que existe vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República.

Decisión de la Corte Constitucional:

Declara la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica, así como el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, previstos en los artículos 82 y 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República, respectivamente.

Como medidas de reparación integral, se dispone: Dejar sin efecto la sentencia dictada el 6 de septiembre de 2011, por los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia dentro del recurso de casación N.º 252-2008.

Retrotraer los efectos al momento de la vulneración de los derechos constitucionales esto es, a la fase de resolución del recurso de casación dentro de la causa N.º 252-2008.

Comentario Personal:

En la sentencia analizada por la Corte Constitucional se puede apreciar un correcto análisis sobre los derechos que se consideran vulnerado por parte del legitimado activo, así en cuanto al derecho de la seguridad jurídica se determina una errónea aplicación de normas a la fase resolutive del recurso de casación. Así mismo apreciamos un completo análisis del test de motivación determinando punto por punto los requisitos de la motivación como son la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad, llegando a la conclusión que estos requisitos no han sido cumplidos por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia; por lo que expone claramente que se ha violado el derecho a la Motivación, aceptando la Acción Extraordinaria de Protección.

SENTENCIA No. 219-15-SEP-CC. CASO No. 1286-14-EP. CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.

Sentencia dictada en Quito el 09 de julio de 2015.

Willen Johannes Jiskoot y Carolina Vela Vela Moscoso, por sus propios derechos, presentaron acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el 9 de julio de 2014.

Sentencia impugnada:

Se impugna la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el 9 de julio de 2014 en la que se acepta el recurso de apelación interpuesto por Procuraduría General el Estado, y María Balladares Ayala, como Gerente General de ESPANICORP S.A., como tercero perjudicado, y declara sin lugar la presente acción de protección planteada por Willem Pieter Johannes Jiskoot y Carolina Vela Moscoso por improcedente.



Pretensión concreta:

Que se acepte la acción extraordinaria de protección y que se reparen integralmente los derechos constitucionales vulnerados.

Contestaciones de la demanda

La jueza sustanciadora de la causa mediante providencia concedió el término de cinco días a los jueces que integran la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, a fin de que presenten un informe de descargo, sin embargo, las autoridades judiciales no cumplieron con lo solicitado.

Consideraciones de la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional se declara competente para conocer y resolver las acciones extraordinarias de protección, contra sentencias, autos y resoluciones con fuerza de sentencia.

En cuanto a los legitimados activos, estos se encuentran legitimados para interponer la presente acción extraordinaria de protección.

Determinación del Problema jurídico:

La sentencia expedida por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas dentro de la acción de protección N.º 0404- 2014, ¿vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación?

La Corte Constitucional establece que para que una sentencia se encuentre debidamente motivada, debe superar el examen de tres presupuestos (razonable, lógica y comprensible), presupuestos que deben ser contrastados con el caso en concreto a fin de determinar si fueron observados en la sentencia impugnada.

La razonabilidad:

La Corte Constitucional reconoce que dentro del razonamiento de los jueces se confunde al amparo constitucional con la acción de protección, lo cual conduce a los juzgadores a cometer el error de pedir que se agoten las vías en las justicia ordinaria, contrariando lo prescrito en el artículo 88 de la Constitución, que define a la acción de protección como aquella garantía que busca "(...) el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución (...)", pues no entran a analizar la posible vulneración de derechos constitucionales en el caso en concreto.

La Corte Constitucional respecto de la acción de protección ha establecido que esta garantía jurisdiccional tiene como objetivo primordial el de proteger los derechos constitucionales de toda persona, ante abusos de poderes públicos y privados, cumpliendo, por ende, dos objetivos fundamentales: la tutela de los derechos constitucionales de las personas, así como la declaración y la consiguiente reparación integral de los daños causados por su violación pues de esta manera, se reitera la eficacia y supremacía de los derechos constitucionales.⁸⁵

Así mismo la Corte Constitucional menciona que se puede colegir que la acción de protección no podrá interponerse en contra de resoluciones judiciales pues, para este fin, el legislador ha diseñado la acción extraordinaria de protección, garantía jurisdiccional que precautela que quienes han de juzgar una causa, lo hagan en estricto apego de la norma constitucional, respetando el debido proceso, garantizando la tutela judicial efectiva y en base al principio de la seguridad jurídica, para de esta forma garantizar todos los derechos constitucionales.

Según se desprende de los artículos 40 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y conforme lo ha señalado esta Corte a través de múltiples fallos, tiene, por un lado, causales de inadmisión, en las que el juez constitucional, sin requerir de un mayor análisis ni sustanciación del proceso, inadmite la acción, ya sea porque esta fue presentada sobre un

⁸⁵ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 169-14-SEP-CC.

pronunciamiento judicial o porque fue presentada sobre un acto u omisión del Consejo Nacional Electoral; y causales por las cuales procede de forma directa y sin ningún análisis la inadmisión, pues dichos actos son identificables por el juez constitucional desde el momento inicial en que la acción es presentada. Por otra parte, están las causales de improcedencia de la acción de protección en donde el juez debe, necesariamente, no solo impulsar la sustanciación del proceso, sino también efectuar un análisis minucioso que le permita formarse un criterio de si existió o no la vulneración de un derecho constitucional y determinarlo de manera motivada a través de una sentencia.

Consecuentemente, bajo los supuestos del artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la inadmisión en la acción de protección resulta una cuestión excepcional, es decir, solo debe darse ante la imposibilidad del juez de subsanar los requisitos de contenido mínimo de la demanda. En efecto, el carácter de protección de las garantías jurisdiccionales obliga al juzgador a efectuar una verdadera tutela judicial efectiva ante una aparente vulneración de los derechos constitucionales para que únicamente, luego de la sustanciación del procedimiento respectivo se establezca si se verificó o no la vulneración.

Mientras que la improcedencia debe ser debidamente motivada pues, no basta con que el juez indique que la acción de protección es improcedente porque existe una vía en la justicia ordinaria, sino que debe explicar con claridad en el caso concreto, las razones que le llevan a considerar tal afirmación.

Por lo que los juzgadores no pueden simplemente escudarse tras las causales de improcedencia para no conocer el fondo del asunto, alegando que se tratan de temas de mera legalidad o que existe una vía en la justicia ordinaria para el problema jurídico identificado, sino que deben dar razones suficientes que justifiquen su decisión en estricto apego a las disposiciones constitucionales, respetando las reglas de la lógica jurídica y en un lenguaje claro y comprensible.

La Corte Constitucional menciona que no puede dejar de pronunciarse sobre la afirmación vertida por la Sala dentro del apartado de su sentencia denominado análisis de la sala, en la que señalan que: "(...) no puede un juez constitucional

convalidar vía acción de protección (...) irregularidades de funcionarios contra los cuales la ley le franquea un procedimiento determinado, pues ello, implicaría violentar las normas del debido proceso (...)".

En consecuencia, se evidencia que el argumento de los jueces provinciales no se encuentra fundamentado en ningún principio constitucional sino que más bien, se encuentra en franca contradicción con el contenido del artículo 88 de la Constitución en relación a la naturaleza de la acción de protección, por lo que la Corte Constitucional considera que la sentencia impugnada, al no estar fundamentada en principios constitucionales carece de razonabilidad.

La lógica:

La Corte Constitucional menciona que los juzgadores inobservan la disposición constitucional contenida en el artículo 88 de la Constitución y el contenido del que esta Corte le ha dotado, para llegar a la conclusión errada de que al existir una vía en la justicia ordinaria para conocer los temas propuestos por el accionante, la acción es improcedente, evadiendo así su obligación de entrar a resolver sobre el fondo del asunto para así poder explicar con claridad las razones por las cuales consideran que se trata o no, de un tema de relevancia constitucional, lo que provoca que la sentencia impugnada no ajuste las normas de derecho que utiliza (causales de improcedencia) a los hechos del caso concreto por lo cual, no supera el análisis del parámetro de la lógica.

La comprensibilidad:

La Corte Constitucional observa que la sentencia no da razones suficientes que le permitan al lector entender la motivación que tuvieron los juzgadores para tomar la decisión impugnada, lo que impide una completa y correcta comprensión de las ideas contenidas en la resolución por lo que no cumple con el parámetro de comprensibilidad.

La Corte Constitucional considera finalmente que existió vulneración del debido proceso en la garantía de la motivación, ya que la sentencia impugnada no se encuentra motivada con estricto apego a los preceptos constitucionales, esto

es no supera el test de motivación establecido por esta Corte para analizar la motivación de las decisiones judiciales.

Decisión de la Corte Constitucional:

Se declara la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación.

Como medidas de reparación integral se dispone: dejar sin efecto la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial del Guayas, el 9 de julio de 2014 a las 09h14, que resolvió el recurso de apelación dentro de la acción de protección N.º 09133-2014-0404 y disponer que previo sorteo sea otro Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas la que resuelva el recurso de apelación en observancia de las garantías del debido proceso y del análisis realizado en la presente sentencia.

Comentario Personal:

En ésta Acción Extraordinaria de Protección se puede notar como la Corte Constitucional realiza nuevamente un examen detallado de los requisitos que debe contener el derecho a la motivación, como son la razonabilidad, la lógica y la lógica y la comprensibilidad, incluso se establece las reglas para el análisis de la admisión y la inadmisión de la Acción de Protección, pronunciándose que al no cumplirse con los requisitos del test de motivación se ha violado claramente el derecho a la motivación; podemos notar que al resolver cada uno de los requisitos expone sus razones detalladamente y que al no cumplirse con el requisito de la razonabilidad, los demás requisitos también no se cumplen; por lo tanto la Corte Constitucional acepta la Acción Extraordinaria de Protección.

**SENTENCIA N.° 184-15-SEP-CC CASO N.° 1637-13-EP. CORTE
CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR**

Sentencia dictada en Quito el 03 de junio de 2015.

El ingeniero Marco Calvopiña Vega, gerente general y representante legal de la empresa PETROECUADOR EP, a través de su procurador judicial y apoderado especial, doctor Carlos Guerra Román, presenta acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 22 de julio de 2013, por los jueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio N.° 944-2011, por considerar que la referida sentencia vulnera derechos constitucionales.

Decisión judicial que se impugna:

La decisión judicial impugnada es la sentencia dictada el 22 de julio de 2013, por los jueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, la cual casa la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 7 de julio del 2011, a las 09h36; en consecuencia se acepta la demanda, disponiendo que PETROCOMERCIAL pague la cantidad de USD. 9.346,34 más la parte proporcional de la pensión jubilar patronal mensual e intereses correspondientes conforme el Art. 614 del Código del Trabajo.

Pretensión concreta:

El accionante solicita que se declare la violación a los derechos constitucionales del debido proceso, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a la seguridad jurídica transgredidos en la sentencia de 22 de julio de 2013, emanada de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia y que se ordene la reparación integral de los mencionados derechos, para lo, cual se tomará entre otras medidas, la de dejar sin efecto la sentencia mencionada.

Contestación de la demanda:

Los demandados mencionan que la sentencia dictada por los jueces nacionales cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley; por lo que consideran que no viola ningún derecho constitucional, pues afirman que en su condición de jueces están obligados constitucional y legalmente a resolver de acuerdo a la fundamentación proporcionada, cumpliendo con los principios procesales que gobierna nuestro sistema jurídico, lo cual, señalan, ha sido observado por parte de quienes dictaron la sentencia de casación

Consideraciones de la Corte Constitucional:

La Corte Constitucional se declara competente para conocer y resolver las acciones extraordinarias de protección, contra sentencias, autos y resoluciones con fuerza de sentencia.

En cuanto a los legitimados activos, estos se encuentran legitimados para interponer la presente acción extraordinaria de protección.

Determinación de los problemas jurídicos:

1. La sentencia impugnada ¿vulneró el derecho a la seguridad jurídica?

En el caso sub judice, el señor Miguel Ángel Duque presentó recurso de casación en contra de la sentencia dictada por los jueces de la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, amparado en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.

Dicho recurso de casación fue aceptado por los jueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, quienes revocaron la sentencia dictada por los jueces provinciales y ordenaron el pago de \$ 9.346,43 a favor del trabajador.

La Corte Constitucional, respecto de la casación en sentencia N.º 072-13 SEPCC se ha pronunciado en el sentido de que "[...] al ser la casación un recurso de carácter extraordinario no se trata de una instancia adicional en la

cual se puedan analizar temas que ya fueron conocidos, discutidos y resueltos en la instancia inferior”.⁸⁶

La casación constituye un recurso excepcional, dispositivo y rigurosamente formal, por el que los jueces de casación deben actuar en función de los límites establecidos en la Ley de Casación es así que, en el marco de lo contemplado en dicha norma, las autoridades se encuentran impedidas de realizar una revisión de los hechos o entrar a valorar las pruebas que se debieron actuar en las instancias inferiores; la Corte Nacional de Justicia, por tanto, debe circunscribir su decisión.

En virtud de lo señalado, los jueces de casación actuaron en el marco de lo establecido en la Ley de Casación, considerando las normas aplicables a la materia vigentes al momento de su aplicación; estableciendo por ello, que correspondía a PETROCOMERCIAL, cumplir con lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Mandato Constituyente N.º 8 Concluyendo por tanto, que el trabajador debió haber sido reintegrado a la empresa PETROCOMERCIAL de acuerdo con las disposiciones contempladas en el Mandato Constituyente N.º 8.

La Corte Constitucional, no evidencia que en el fallo impugnado se haya vulnerado el derecho constitucional a la seguridad jurídica, tal como alega el accionante; pues, los jueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia en observancia de la Constitución y las normas que integran el ordenamiento jurídico, sustentaron su decisión en disposiciones previas, claras y públicas en el marco de su competencia.

2. La sentencia impugnada ¿vulneró el debido proceso en cuanto a la garantía de la motivación?

La Corte procede a analizar si la fundamentación efectuada por los jueces en la sentencia, cumple con los requisitos determinados precedentemente; para, que por tanto, pueda considerarse debidamente motivada; esto es si cumple con los requisitos de la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad.

⁸⁶ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N° 072-13-SRP-CC, Caso N."0886-IO-EP.

La razonabilidad:

La Corte Constitucional establece que los jueces emitieron su fallo en observancia de las disposiciones aplicables al caso, pues, establecieron de manera clara los fundamentos normativos y contractuales, sustentándose así las razones jurídicas suficientes para la resolución de esta sentencia; es decir, respetando el ordenamiento jurídico vigente. De lo expuesto, esta Corte Constitucional determina que la sentencia adoptada por la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia se encuentra basada en criterios de razonabilidad.

La lógica:

La Corte Constitucional en virtud de las circunstancias fácticas del proceso contrastadas con las disposiciones normativas, los jueces de casación concluyeron que el trabajador no recibió la compensación; por lo que las circunstancias fácticas y de las normas aplicables al caso, determina que la sentencia impugnada cumple con el requisito de lógica.

La comprensibilidad:

En relación con la sentencia materia de impugnación, esta Corte Constitucional evidencia que la misma denota claridad en el lenguaje utilizado, pues, las expresiones contenidas son precisas y de fácil comprensión para las partes procesales y los lectores, agregando, además, que se ha respetado y observado los parámetros de razonabilidad y lógica.

La Corte Constitucional concluye que la sentencia del 22 de julio de 2013, dictada por la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, cumple con los requisitos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad; es decir, que se encuentra debidamente motivada, por lo que no existe vulneración al derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación de las resoluciones judiciales, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República.

Decisión de la Corte Constitucional:

Declarar que no existe vulneración de los derechos constitucionales.

Negar la acción extraordinaria de protección propuesta.

Comentario personal:

En esta Acción Extraordinaria de Protección, podemos notar como la Corte Constitucional realiza un examen detallado tanto sobre el derecho a la seguridad jurídica como el derecho a la motivación. En cuanto al derecho a la seguridad jurídica se observa cómo se ratifica la decisión de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ya que ésta aplicó correctamente las normas contenidas en la Ley de Casación vigente al momento de su aplicación, por lo que no se ha violado el derecho a seguridad jurídica y ha existido la observancia a la Constitución y al ordenamiento jurídico. En cuanto al derecho a la motivación, la Corte Constitucional realiza una vez más el test de motivación, revisado cada uno de los requisitos que son el de razonabilidad, lógica y la comprensibilidad, concluyendo que se ha cumplido con cada uno de ellos, por lo tanto, el derecho a la motivación ha sido cumplido a cabalidad, tanto por la correcta aplicación de normas, como una claridad en el lenguaje y la existencia de una debida motivación; declarando que no ha existido vulneración a los derechos constitucionales.

Conclusiones

Del estudio realizado puedo establecer las siguientes conclusiones:

- La Acción Extraordinaria de Protección permite que se garanticen los derechos consagrados en la Constitución, como también la protección a las normas del debido proceso y la protección de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales que versen sobre los derechos humanos y que han sido suscritos por el Ecuador.
- No se debe confundir a la Acción Extraordinaria de Protección con un recurso, ya que el recurso es un medio mediante el cual existe la posibilidad de modificar una decisión judicial a través del acceso a otros niveles jerárquicos dentro del mismo proceso. La Acción Extraordinaria de Protección en cambio, permite la apertura de un nuevo proceso en instancia constitucional; totalmente diferente a una instancia dentro del proceso ordinario. En este nuevo proceso de jurisdicción constitucional únicamente se realizará un exámen para determinar la violación de derechos en las decisiones judiciales que han sido impugnadas.
- Si bien el objetivo de la Acción Extraordinaria de Protección es la tutela inmediata y directa de los derechos fundamentales de todas las personas, los requisitos que se han establecido para su tramitación presentan un cierto grado de complejidad, razón por la cual pueden tornar un tanto restrictiva esta garantía.
- La motivación en las resoluciones judiciales, le impone al juez hacer explícito el curso argumental seguido para adoptar determinado razonamiento, por lo tanto, es una condición necesaria para la evitar a toda costa cualquier rastro de la arbitrariedad. Es por ello que los jueces han de tener una actuación judicial, independiente e imparcial,

apegada a la normatividad constitucional y a la normativa internacional de los derechos humanos.

- Para que se cumpla con la garantía de la motivación a plenitud de acuerdo con los dictámenes de la Corte Constitucional, que son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los jueces y tribunales de justicia, estos han de cumplir estrictamente con los tres requisitos o presupuestos que son la *razonabilidad*, la *lógica* y finalmente la *comprensibilidad*, y bastará que uno de ellos no se cumpla para que la resolución judicial carezca de motivación y por lo tanto ésta sea nula.
- Se debe tener en consideración que la Acción Extraordinaria de Protección es una acción de carácter extraordinario y que debe ser interpuesta luego de agotar todos los recursos verticales y horizontales, incluso se la debe interponer luego de haber interpuesto la Acción de Nulidad de Sentencia, caso contrario, puede existir la posibilidad de que se interpongan las dos acciones simultáneamente lo que provocaría que se den fallos contradictorios; por tanto se debe agotar esta acción para poder interponer la Acción Extraordinaria de Protección.
- Finalmente, a título de falta de motivación en las resoluciones judiciales, como por ejemplo en las sentencias; se presenta un sin número de Acciones Extraordinarias de Protección en la Corte Constitucional, razón por la cual se estaría desvirtuando esta acción convirtiéndola en otra instancia, sin embargo, se debe tener en cuenta que no se trata de una instancia adicional a la cual se puede acudir cuando una sentencia ha sido desfavorable a los intereses de los particulares, si no que se recurre a ella cuando una determinada decisión judicial haya incurrido en la violación de derechos constitucionales o normas del debido proceso.

Recomendaciones

Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Es necesario que los jueces, en ejercicio de su actividad jurisdiccional al momento de dictar las resoluciones judiciales, tengan una apropiación de la cultura del debido y demás derechos constitucionales, con el fin de que en las decisiones se refleje una actuación judicial, independiente e imparcial, apegada a la normatividad constitucional y a la normativa internacional de los derechos humanos, evitando por lo tanto la violación a los mismos. Para esto es necesario que se capacite a los jueces permanentemente, sugiriendo hacerlo con casos resueltos por la Corte Constitucional, ya que estos al ser de obligatorio cumplimiento sean observado por los jueces en todas las materias, logrando así reducir en gran manera que se dicten decisiones judiciales en las que se hay violado la garantía del debido proceso.
- La formación de los abogados es fundamental en el estudio de la Acción Extraordinaria de Protección; es por eso que en las distintas escuelas de derecho se debe analizarla a fondo, así mismo se ve la necesidad de crear seminarios, talleres o debates debido a que en el ejercicio profesional frecuentemente estos incurren en errores en los requisitos o no fundamenten correctamente este recurso y dada la importantísima función que cumple la Acción Extraordinaria de Protección, que es la protección de los derechos fundamentales; se estaría causando un daño a los clientes que confían en sus patrocinadores. Además, es necesaria su formación ya que la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales establece que a través del Consejo de la Judicatura se impongan sanciones para los abogados que la interponen de una manera abusiva o sin fundamentación, pudiendo incluso suspenderle el ejercicio profesional en caso de reincidencia, debido a que en la mayoría de casos se trata de lograr por parte de estos decisiones que favorezcan a



sus intereses y que fueron negados en la jurisdicción ordinaria, pretendiendo que la Corte Constitucional actúe como si fuese una instancia más, pero como lo hemos analizado la competencia de la Corte Constitucional al analizar esta acción es completamente independiente.

- Es necesario que la Corte Constitucional mediante el desarrollo de jurisprudencia establezca criterios sólidos acerca de la motivación y su contenido para la aplicación directa de los jueces y tribunales y permitiendo además que el objetivo de esta acción se cumpla de una manera eficaz; pero teniendo siempre en consideración la inclusión o la reforma de su contenido debido los múltiples cambios que se van dando dentro de la sociedad, debido a que si no se toma en consideración este punto, la garantía de la motivación sería siempre estática ocasionando nuevamente problemas al momento de dictar resoluciones judiciales y cumplir con este requisito; siendo necesario que la propia Corte Constitucional mediante el desarrollo de jurisprudencia,

Bibliografía

- ASAMBLEA NACIONAL. “Libro III del COGEP transformará el sistema probatorio del país”: Mauro Andino. Internet. <http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/libro-iii-del-cogep-transformara-el-sistema-probatorio-del>. Acceso: 9 de Noviembre de 2015
- Atienza Rodríguez Manuel: “La Argumentación en Materia de Hechos. Comentario Crítico a las Tesis de Perfecto Andrés Ibáñez”, *Revista Jueces para la Democracia*, 1994.
- CABANELLAS CUEVAS, G. *Diccionario Jurídico Elementa*. Heliasta Ediciones. Quito, 2003.
- Cabanellas, Guillermo. *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. Argentina ED. Heliasta. Tomo VII. 2014, Pág. 188, 189.
- Coello, Hernán. *Epítome del Título Preliminar del Código Civil y sus principales elaciones con la legislación ecuatoriana*. Universidad de Cuenca. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Política y Sociales. Segunda Edición. Cuenca. 2004.
- CHAMORORO BERNAL, Francisco. *La Tutela Judicial Efectiva. Derechos y Garantías Procesales derivados del artículo 24.1 de la Constitución*. Barcelona: Bosch, Casa Editorial, S.A., 1994.
- Código Orgánico de la Función Judicial.
- Código Orgánico General de Procesos.
- Código Civil del Ecuador.
- Constitución Política de la República de 1998.
- Constitución de la República del Ecuador del 2008.
- Cordón Aguilar Julio, “La Motivación: Exigencia Constitucional”. *Revista de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala*. Guatemala, 2012.
- Corte Constitucional del Ecuador. *Sentencia 067-10-Sep-CC*.
- Corte Constitucional del Ecuador. *Sentencia 001-10-PJO-CC*.
- Corte Constitucional del Ecuador. *Sentencia 11-09SEP-CC*; 2009.
- Corte Constitucional del Ecuador. *Sentencia No. 154-15-SEP-CC*. Caso No. 1220-11-EP.
- Corte Constitucional del Ecuador. *Registro Oficial No. 423: 23-01-2015*.



- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 180-15-SEP-CC.
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 154-15-SEP-CC.
- Corte Constitucional del Ecuador. *Sentencia* 001-10-PJO-CC.
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 203-14-SEP-CC, caso N.º 0498-12-EP.
- Corte Constitucional del Ecuador. SENTENCIA No. 0228-14-SEP-CC.
- Corte constitucional del Ecuador. Sentencia No. 203-14-SEP_CC.
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No 101-15-SEP-CC.
- Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N.º 203-14-SEP-CC, caso N.º 0498-12-EP.
- Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, Sentencia N.º 025-09-SEP-CC, casos N.º 0023-09-EP, 002 4-09-EP y 0025-09-EP (Acumulados).
- Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia N.º 227-12-SEP-CC, caso No. 1212-12-Ep.
- Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 092-13-SEP-CC, caso No. 0538-1i-EP.
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 167-14-SEP-CC, caso N.º 1644-11-EP.
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 030-15-SEP-CC, Caso No. 0849-13-EP
- Corte Constitucional. Sentencia No. 030-15-SEP-CC, Caso No. 0849-13-EP.
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 009-14-SEP-CC.
- Sentencia N.º 167-14-SEP-CC, caso N.º 1644-11-EP.
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 0228-14-SEP-CC, caso N.º 1815-11-EP.
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 044-14-SEP-CC, caso No. 0592-11-EP.
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 025-16-sep-cc, caso N.º 1816-11-EP.

- Corte Constitucional del Ecuador sentencia No. 006-10-SEP-CC. Caso No. 0712-09-EP.
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 035-10-SEP-CC. Caso No. 0261-09-EP.
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 012-14-SEP-CC. Caso N.º 0529-12-EP.
- Corte Constitucional del Ecuador. SENTENCIA N.º 21915SEP-CC. CASO N.º 1286-14-EP.
- CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. SENTENCIA N.º 184-15-SEP-CC CASO N.º 1637-13-EP.
- Corte Nacional de Justicia. Expediente No. 435-99, Primera Sala, Registro Oficial 274, 10-IX-99.
- Corte Nacional De Justicia. Sala De Lo Civil Y Mercantil. Sentencia 26 de Noviembre del 2012.
- Corte Nacional de Justicia. Expediente No. 506, Primera Sala, Registro Oficial 2, 13-VIII-96.
- Corte Suprema de Justicia del Ecuador. Resolución No. 83-99, del 11 de febrero de 1999 publicada en Registro Oficial No. 159 de fecha 30 de marzo 1999.
- Couture Eduardo, *Estudios de Derecho Procesal Civil: El Juez, las Partes y el Proceso*, T. III, Tercera Edición, LexisNexis-Depalma, Buenos Aires, 2003.
- Couture Eduardo, *Vocabulario Jurídico*. Buenos Aires: Depalma, 1978.
- Couture Eduardo, *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, Editorial BdeF, Cuarta Edición, Montevideo – Buenos Aires, 2005.
- CUEVA CARRIÓN, *Acción Constitucional Extraordinaria de Protección*. Quito, 2010.
- Cueva Carrión, *El Debido Proceso. Segunda Edición, ampliada y actualizada*. Quito, 2013.
- De la Rúa Fernando, *TEORIA GENERAL DEL PROCESO*.- Editorial Depalma. Argentina, 2013.

- De la Rúa Jorge, La Sentencia. Teoría General del Proceso. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1991.
- Devis Echandía Hernando, *Teoría General del Proceso*. Editorial Universitaria. Buenos Aires, 1977.
- Diccionario de la lengua española. Espasa Libros, S. Editorial, 23° Edición. Madrid, 2014.
- Dolcini Emilio, Commentario breve al Codice Penale[Alberto Crespi – Federico Stella –Giuseppe Zuccala; Padova; Cedam; 4 edición, 2003
- Estoehrel Maes Carlos, De las disposiciones comunes a todo Procedimiento y de los incidentes. Quinta Edición. ED. Chile. 2010.
- Estrella Carmen, “La Acción Extraordinaria de Protección”. Tesis de Grado. Programa de Maestría en Derecho. Mención en Derecho Constitucional. Universidad Andina Simón Bolívar sede en Ecuador. Quito, 2010.
- Espinosa Verónica, Motivación de las resoluciones judiciales de casación civil y laboral dentro del debido proceso. Tesis de grado. Programa de maestría en derecho procesal, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Quito, 2008,
- Espinosa Cueva Karla: Teoría de la motivación de las resoluciones judiciales y jurisprudencia de casación y electoral. Tribunal Contencioso Electoral. V&M GRAFICAS, primera edición. Quito, 2010.
- Espinosa, Verónica, Motivación de las resoluciones judiciales de casación civil y laboral dentro del debido proceso. Quito, 2008.
- Expediente No. 435-99, Primera Sala, R.O. 274, 10-IX-99.
- Expediente No. 506, Primera Sala, R.O. 2, 13-VIII-96.
- Franciskovic Ingunza Beatriz y Torres Angulo Carlos, LA SENTENCIA ARBITRARIA POR FALTA DE MOTIVACIÓN EN LOS HECHOS Y EL DERECHO. *Gaceta Jurídica Editorial*. 2012.
- Gama Raymundo, Concepciones y tipología de las presunciones en el derecho continental. Revista de estudios y Justicia. 2013.
- Guerrero del Pozo Juan Francisco, “La residualidad de la acción extraordinaria de protección frente a la acción de nulidad de sentencia”,

en *Nuevos Retos del Constitucionalismo Ecuatoriano: Democracia, Garantías y Derechos*, Asociación Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito, 2011.

- Internet:http://www.dgalegal.com/sites/default/files/documentos/la_residuidad_de_la_accion_extraordinaria_de_proteccion.pdf. Acceso: enero 2016.
- Internet:<http://patriciopazminofreire.blogspot.com/2013/03/la-accion-extraordinaria-de-proteccion.html>. Acceso: febrero 2016.
- Internet:<http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/providencia/providencia.htm>. Acceso: Febrero 2016.
- Internet: <http://definicion.de/providencia/> Acceso: Febrero 2016.
- Internet:<http://www.monografias.com/trabajos87/motivacionjuridica/motivacion-juridica.shtml>. Acceso: Abril 2016.
- Internet:<http://www.encyclopediajuridica.biz14.com/d/providencia/providencia.htm> Acceso: Febrero 2016.
- Internet:<http://concepto de legitimación - Definición en DeConceptos.com> Acceso: febrero 2016
- Internet:<http://deconceptos.com/cienciasjuridicas/legitimacion#ixzz3yr6GAYh1>. Acceso: febrero 2016.
- Internet:<http://es.scribd.com/doc/68287233/CLASIFICACION-SENTENCIA#scribd>. Acceso: marzo 2016,
- Internet:<http://www.cc.gob.gt/DocumentosCC/InfoCC/Octubre2012.pdf>. Acceso: Marzo 2016.
- Internet:<http://institutovidaysalud.org.pe/publicaciones/10-LA-SENTENCIA-ARBITRARIA.pdf>. Acceso: marzo 2016.
- Internet:<http://www.monografias.com/trabajos87/motivacionjuridica/motivacion-juridica.shtml>. Acceso: marzo 2016.
- Internet:http://www.gozaini.com/propios/32/09-debido_proceso.PDF. Acceso: marzo 2016.
- Internet:<http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/1031/1/TESIS%20WILLAM.pdf>. Acceso: marzo 2016.

- Internet:<http://www.encyclopediajuridica.biz14.com/d/providencia/provide>ncia.htm. Acceso: marzo 2016.
- Internet:<http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/11/dpc13.html>. Acceso: Marzo 2016.
- Internet:<http://es.scribd.com/doc/68287233/CLASIFICACIONSENTENCIA#scribd>. Acceso: marzo 2016.
- Jaramillo Villa, Marcelo: La Acción Extraordinaria de Protección.
- Ley de Modernización del Estado.
- Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ecuador.
- Mass Mixan Florencio, *Lógica. Enunciativa y Jurídica*. Ediciones BLG. Lima, 2009.
- Milione, Ciro. El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el derecho a la claridad: reflexiones en torno a una deseada modernización del lenguaje jurídico. Edición electrónica.2015.
Internet:http://www.carmenparedes.com/JURISPRUDENCIA/jurisprudencia_1.pdf. Acceso: Marzo 2016.
- Morales Molina Hernado, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General. Editorial A.B.C., Bogotá, 1983.
- Nekita, "La Motivación de las Sentencias y su sentido histórico". Edición electrónica. Internet:<http://derechoacotaciones.blogspot.com/2012/08/obligacion-de-motivar-las-sentencias.html>. Acceso: Marzo 2016.
- Osorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales; Ed. Heliasta. Argentina. 1990
- Paipa Garnica Jarom Abinad, De las Providencias Judiciales. Derecho Colombiano. Sin editorial. 2011.
- Escalante Piza Rodolfo, Sentencia sobre el debido proceso. Voto en el fallo No. 1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa rica. 1992.
- Registro Oficial No. 274, 10-IX-99.
- Registro Oficial No.2, 13-VIII-96.



- Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. Ecuador.
- VILLALOBOS, Lisbeth. Las presunciones como medios probatorios. Trabajo de grado. Doctorado en Derecho de la Universidad de Zulia. Venezuela
- Zabala Baquerizo, Jorge: *El Proceso Penal*. Edino. Guayaquil, 1990.
- Zerpa; Ignacio. La comunidad de la prueba en la jurisprudencia reciente de la Sala de Casación Civil en Derecho Procesal Civil. Hermanos Editores. Valencia. 1998.